



EL DESPERTAR DE

LA JAGUA

El paro del 10 de febrero

Álvaro Enrique Castro Meriño



El despertar de La Jagua: el paro del 10 de febrero

Álvaro Enrique Castro Meriño

Editorial Unimagdalena
Centro Transnacional para Transiciones Justas en Energía, Clima y
Sustentabilidad (TRAJECTS)
Semillero de Investigación Energética de
la Universidad del Magdalena

Castro Meriño, Álvaro Enrique, autor

El despertar de La Jagua : el paro del 10 de febrero / Álvaro Enrique Castro Meriño. -- Primera edición.
-- Santa Marta : Editorial Unimagdalena, 2025.

1 recurso en línea: PDF.

Bibliografía.

ISBN 978-958-746-873-1 (impreso) -- 978-958-746-875-5 (pdf) -- 978-958-746-874-8 (epub)

1. Movimientos de protesta - Historia - La Jagua de Ibirico (Cesar, Colombia) - Siglos XXI 2. Industria del carbón - Aspectos socioeconómicos - La Jagua de Ibirico (Cesar, Colombia) - Siglos XX-XXI 3. Industria minera - Aspectos ambientales - La Jagua de Ibirico (Cesar, Colombia) - Siglos XX-XXI 4. La Jagua de Ibirico (Cesar, Colombia) - Reclamaciones - Historia - Siglo XXI

CDD: 303.4840986118 ed. 23

CO-BoBN- a1151485

Primera edición, junio de 2025

2025 © Universidad del Magdalena. Derechos Reservados.

2025 © Centro Transnacional para Transiciones Justas en Energía, Clima y Sustentabilidad (TRAJECTS). Derechos Reservados.

Editorial Unimagdalena

Calle 29H3 n.º 22-01

Edificio de Innovación y Emprendimiento

(57 - 605) 4381000 Ext. 1888

Santa Marta D.T.C.H. - Colombia

editorial@unimagdalena.edu.co

<https://editorial.unimagdalena.edu.co/>

Rector: Pablo Vera Salazar

Vicerrector de Investigación: Jorge Enrique Elías-Caro

Coordinadora de Publicaciones y Fomento Editorial: Angélica María Cortes Martínez

Diseño editorial: Luis Felipe Márquez Lora

Diagramación: Jeynner Kevin Páez Vélez

Diseño de portada: Andrés Felipe Moreno Toro

Corrección de estilo: Ricardo Adrián Tete Mieles

Santa Marta, Colombia, 2025

ISBN: 978-958-746-873-1 (impreso)

ISBN: 978-958-746-875-5 (pdf)

ISBN: 978-958-746-874-8 (epub)

DOI: <https://doi.org/10.21676/9789587468731.9789587468755>

Hecho en Colombia - Made in Colombia

La UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, en su calidad de editora y titular de derechos patrimoniales de autor, y en su propósito de contribuir con la difusión y divulgación del conocimiento, la producción intelectual y la educación, dispone autorizar la reproducción impresa así como su distribución, reproducción digital y puesta a disposición de la totalidad o parte del presente libro de manera libre y gratuita, en tanto se mantenga la integridad del texto y se dé la correspondiente cita a sus autores y mención institucional. No se autoriza la realización de versiones derivadas ni traducciones o adaptaciones. Queda prohibida la comercialización o venta a cualquier título de este material.



Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores y no comprometen al pensamiento institucional de la Universidad del Magdalena, ni generan responsabilidad frente a terceros.

Contenido

Agradecimientos	6
Prólogo. La Jagua después del carbón.....	7
Introducción.....	9
Capítulo 1. El origen de una lucha.....	10
Capítulo 2. Primer relato: el paro del «10 de febrero».....	19
Capítulo 3. Segundo relato: el paro del «10 de febrero»	22
Capítulo 4. Tercer relato: el paro del «10 de febrero»	25
Capítulo 5. Primera llegada del presidente a La Jagua de Ibirico	30
Capítulo 6. Compromisos del Estado con la comunidad y las propuestas de las mesas de trabajo	43
Capítulo 7. Lo que despertó al león	49
Capítulo 8. Segunda llegada del presidente y su gabinete.....	51
Capítulo 9. Retos y fracasos de las mesas	55
Capítulo 10. La lucha por la supervivencia de las mesas de trabajo.....	58
Capítulo 11. Las mesas sobreviven a la locomotora minera ...	70
Capítulo 12. La burbuja de riqueza de la minería de carbón y sus consecuencias.....	82
Capítulo 13. Consecuencias de la minería de carbón en el entorno rural	90
Capítulo 14. Los cierres de las minas y los sindicatos	103
Capítulo 15. Las mesas de trabajo, sin apoyo	106
Reflexiones finales	119

Lista de figuras

Figura 1. Explosión de la mina de carbón a cielo abierto	16
Figura 2. Vía que conduce de La Jagua al corregimiento de La Loma	18
Figura 3. Quema de vehículos el 10 de febrero de 2007	20
Figura 4. Estación de policía de La Jagua, 10 de febrero de 2007	23
Figura 5. Miembros de las mesas de trabajo	74
Figura 6. Foto de líderes de las mesas de trabajo.....	75
Figura 7. Boquerón antes de iniciar la explotación minera	94
Figura 8. Boquerón en 2010, antes de la primera resolución	94
Figura 9. Vista periférica de Boquerón.....	98
Figura 10. Corregimiento de Boquerón en la actualidad.....	105

Lista de tablas

Tabla 1. Coordinadores y miembros de las mesas de trabajo	71
---	----

Agradecimientos

A mis hijos José Heriberto, Álvaro Julián, Esthepanny Melisa y Mariangel; a Daniel David Castro Guzmán, y a mi señora, Sandra Milena Guzmán, quienes han sido mi soporte y apoyo. Al profesor Oswaldo Aguilar y, especialmente, a los líderes de esta gesta que marcó un hito en la historia del municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar.

A José Jiménez, Eusebio García Guevara, Germán Albor Montero (q. e. p. d.), Miguel Rivero Camacho (q. e. p. d.), Eligio Ortiz, Enides Pérez Aguilar, Reginaldo Peralta Restrepo, Efraín Arriaga Obregón, Alexander Salazar Ávila, Elkin Benjumea Rangel, Ramisol García, Alix Victoria Aguas Sierra (q. e. p. d.), Adaníes Quintero Becerra, Edilmer Muñoz Bolívar, Adalberto Muñoz Moreno, Luis Antonio Montaña, Edwin Benjumea, Jairo Salazar Ávila, Jorge López, Lorenzo Torres y su esposa Margot, Filia Salazar Ávila, Ana Mary Peralta, Yolanda Rivera Pinkay, Heny Serpa Moreno, Alba Amador, Pedro Díaz Campo, Raúl Romero Rodríguez, Rubí Berrio Mielles, Alfredo Martínez, Ángel Maldonado, Raúl Enrique y Calderón Socarras.

A Silvester Hernández, Alfonso Palacio Niño, los concejales de los periodos 2004-2007 y 2008-2011, Félix Jiménez, Hernando Fonseca, Luis Alfonso Maestre, José Isabel Gómez Maestre, Ricardo Castro, Andrea Cardoso, Carlos Pardo y Loraine Lora..

Prólogo. La Jagua después del carbón

Carlos Pardo Velázquez

En un momento de la historia de nuestro país, el carbón se convirtió en un recurso importante para nuestra economía en vías de desarrollo. El norte global depende de los recursos naturales del sur global, un símil geopolítico para entender la dinámica entre los países desarrollados, que requieren cada día muchos recursos para sostener sus existencias, y los subdesarrollados o en vías de desarrollo, los que vivimos al «otro lado», que nos ilusionamos con la idea de que, algún día, llegaríamos a ser como ellos, aunque la deuda externa aumentaba y nuestros recursos naturales seguían embarcándose, tal como ocurría en la época de la colonia.

¿Por qué hablar de un después del carbón?, ¿ya se acabó?, ¿vivimos, por fin, en sociedades descarbonizadas?, ¿hemos logrado los objetivos de desarrollo sostenible? Muchas preguntas pueden emerger y quizás a lo largo de este libro no encontremos las respuestas definitivas, pero sí podremos dialogar con el escritor de este libro, quien comprende la minería de carbón desde diferentes facetas. Esta obra es un recontar de historias que hilan una red de acontecimientos, diálogos, luchas, viajes, posturas, triunfos y derrotas alrededor de este fascinante tema.

El despertar de La Jagua: 10 de febrero podría ser considerada una denuncia detallada sobre la explotación de carbón en La Jagua de Ibirico, municipio ubicado en el centro del departamento del Cesar, fronterizo con la inmensa serranía del Perijá, cercado por las sabanas más hermosas de la región y bañado por ríos y un complejo cenagoso de la ciénaga de Zapatosa. La Jagua no es un pueblo

pequeño, nunca lo fue, sino que es un municipio enorme. Un día descubrieron que había carbón en sus venas. La bonanza llegó, y con ella, las multitudes. Los campos verdes y productivos se concesionaron. El progreso tocó a estas tierras. El carbón y su maldición se acomodaron sin mucha prisa, aunque es muy irresponsable culpar a una creación natural que tomó miles de millones de años para generarse, siendo el principal vestigio de que la Tierra estuvo inundada por mucho tiempo.

Me gustaría invitarles a disfrutar de esta conversación con el autor, y si usted es de La Jagua, leerá el libro como quien habla con él en un típico día en el pueblo, con café de la serranía del Perijá si es posible. Pero si nunca ha ido a La Jagua, solo sabe de aquello que ha leído, escuchado o lo que le han contado, le informo que debe tomarse un tiempo para leer escuchando. Suena extraño, pero la experiencia de compartir con Álvaro Castro Meriño se resume a una lectura oral: su esencia oratoria y capacidad poética se enmarcan en este libro. No es necesario extenderse demasiado, porque en cada página no existen hilos sueltos.

Cierro contándoles la primera conversación que tuve con Álvaro Castro Meriño, que, evidentemente, fue sobre la minería de carbón. En 2021, en los tiempos de la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria mundial, yo regresaba a una Jagua sin carbón, no porque hubiera acabado, sino porque la mina de Prodeco había entregado sus títulos. Parece cosa del destino que la persona que nos había acompañado durante nuestras visitas al municipio haya sido relevada por este magistral señor. Me hospedé en el hotel Mar Luz, cerca de la plaza del municipio. Mi celular sonó. Bajé a encontrarme con un hombre grande, amable y centrado, con una capacidad para generar confianza desde el primer momento y muy franco al hablar. No hubo necesidad de analizarlo mucho para comprender que tenía al frente mío a un caribeño genuino.

Disfruten el libro, quizás puedan acercarse al deleite que es conversar con este maestro.

Introducción

Esta obra, que nace el 10 de febrero del 2007, surge de las profundidades de una protesta social organizada por las comunidades del municipio de La Jagua de Ibirico, en el corazón del departamento del Cesar, donde he vivido durante los últimos 38 años. A lo largo de estas páginas, el lector descubrirá la verdadera historia de cómo un pueblo, oprimido por una multinacional, encontró la fuerza para alzarse y defender sus derechos. Lo que aquí se narra es la realidad que vivimos, desprovista de toda ficción, y permitirá a las comunidades entender cómo es posible, a través de la resistencia pacífica, reclamar los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia.

A medida que plasmo estas palabras, compartiré hechos ocultos que han ocurrido en los últimos 25 años. Cada capítulo es producto de las entrevistas a los actores sociales que participaron en la protesta del 10 de febrero.

Mi deseo es que Colombia y la comunidad internacional conozcan la cruda verdad de lo que sucedió en la tierra que me adoptó, con el fin de que sea conocida y nunca olvidada.

Capítulo 1. El origen de una lucha

Era el mes de abril de 2006. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) descendían desde las veredas de La Jagua de Ibirico, incluyendo sus corregimientos. Venían en camiones, cargando a quienes se habían desmovilizado en el proceso de paz bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Nuestro municipio ya había sido asolado por las guerrillas de las FARC y el ELN. Fueron las AUC las que, al final, dejaron gran parte de nuestra población desplazada, tanto en la zona rural como en la urbana. Para entonces, transitaban por la vía nacional, lo que hoy conocemos como la «Diagonal 1» de nuestro municipio, alrededor de 400 tractomulas cargadas con más de 40 toneladas de carbón térmico, sin tener idea del peso que tenían cuando regresaban vacías.

Esa carga indiscriminada estaba deteriorando la vía principal. A lo largo de esta vía, los comerciantes habían establecido sus ventas, negocios, restaurantes y almacenes. El polvo que generaban las 16 llantas de cada tractomula y el constante tránsito habían causado un daño considerable. Era incomprensible ver cómo una empresa multinacional estaba destrozando las calles de nuestro pueblo sin consecuencias. No solo afectaba el paso por la vía principal, sino que también las calles de cada barrio estaban cubiertas del barro dejado por las camionetas que entraban en la ciudad, procedentes de la mina. Los conductores lavaban sus vehículos en las puertas de las viviendas, dejando ese material contaminado por doquier. En el corregimiento de La Palmita, lavar o limpiar las llantas de una tractomula costaba entre 20.000 y 25.000 pesos, lo que generaba ingresos para la economía local.

Este paso por la vía nacional ya había enfurecido a los comerciantes. Los baches en la vía, desde la entrada de la subestación hasta

la salida a La Palmita, eran un desastre total. Montañas de llantas estaban apiladas al lado de la carretera.

Desde la salida de la mina hasta la de la ciudad, la contaminación era abrumadora. Caminar por allí implicaba cubrirse la boca con las manos, y los estudiantes tenían que atravesar esta vía para llegar a la escuela. Los accidentes eran frecuentes, lo que suponía un riesgo constante para los niños y niñas de nuestro pueblo.

Frente a la estación de policía, el restaurante Lili y otros puntos donde los conductores de estos tractocamiones solían hacer paradas, algo inusual llamaba la atención. Muchas jóvenes adolescentes y menores de edad esperaban a los choferes para entregarles ropa lavada y recibir su pago. Algunas de ellas subían y emprendían viajes al lado del conductor.

Estos transportistas de carbón circulaban día y noche, llevando su carga hacia los puertos de Santa Marta y Tamalameque. La Jagua de Ibirico había emergido recientemente tras muchos años de violencia, desplazamientos forzados, asesinatos y masacres. La minería, como se decía en esa época, sería la «bonanza minera del carbón» que el Dr. Jorge Isaac Rincón pronosticaba desde la esquina de Carlos Mendoza. Recordaba con humor que se sentaba en el lugar donde actualmente se encuentra la Alcaldía nueva. Decía con seguridad: «Juemierda, no me creen, pero en poco tiempo verán cascos de todos los colores, buses y uniformes de todos los colores, porque esta bonanza minera del carbón llegará a este municipio».

Nos mirábamos incrédulos, ya que era 1985 y su predicción parecía descabellada en ese entonces.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que sus palabras se hicieran realidad. El pueblo se inundó de actividades mineras tal como el Dr. Rincón había anticipado. Comenzó una minería rudimentaria, con picos y palas, y los dueños de parcelas se dieron cuenta de que vendiendo carbón podrían mejorar su economía. En esa época, los llamados «barbacheros», un grupo de hombres y mujeres que sabían de la presencia de carbón, tomaron la decisión de extraerlo de manera artesanal en La Jagua.

Así, la realidad superó las expectativas y se crearon cooperativas de extracción de carbón, como Coagrominera, entre otras que no puedo recordar en este momento. Compradores de lugares como Barranquilla adquirirían este carbón, inicialmente destinado a diversas actividades, como la quema de ladrillos.

Tiempo después, la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), que otorgaba licencias ambientales, autorizó que Carboandes realizara la extracción de carbón a pequeña escala. Luego, llegó Carbones del Caribe en 1995, esta empresa vendió sus cinco compañías a la multinacional Glencore, quien finalmente comenzó el proceso de extracción de carbón a gran escala a través de su filial Prodeco.

Después de desplazar a los barbacheros a otras empresas, Glencore desató el desastre ecológico más grande del departamento del Cesar. Para contextualizar, entre 1995 y 1997, se promulgó la Ley 9 de 1993, conocida como la Apertura Económica. Esta ley, bajo los presidentes Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper, marcó el inicio de la apertura económica del país y otorgó un gran poder a las multinacionales para explotar el carbón sin tener en cuenta las consultas previas ni la socialización con las comunidades afectadas por estos proyectos mineros. Los habitantes del territorio, como nosotros, desconocíamos esto en su totalidad. En conversaciones informales, solo se hablaba de prepararse para trabajos en la mina: conductores, operadores, mecánicos, ingenieros, etcétera. Se decía que pagarían bien y que saldríamos de la pobreza. También se hablaba de las regalías que llegarían para que los alcaldes pudieran invertir en sus comunidades. Sin embargo, después de 15 años, el deterioro de nuestro pueblo era evidente. El Gobierno nacional, más bien, el Congreso de la época promulgó el Código Minero, la Ley 685 de 2001, que, según nuestras investigaciones, fue creada por las mismas multinacionales que ya operaban en nuestro territorio. Esta ley ha sido perjudicial para el país en términos de explotación minera.

En el año 2000, un grupo de líderes, invadido por la impotencia y tristeza al ver la negligencia y el abandono del Estado, la Gobernación

y el propio municipio, sintió la necesidad de resistir y comenzar lo que hoy se considera un hito en nuestro pueblo.

En ese momento, La Jagua tenía pocos profesionales en el campo minero. Los jóvenes comenzaron a darse cuenta de que debían prepararse para poder acceder a empleos en la mina. Sin embargo, esta multinacional trajo a personas de todo el país, lo que generó una población flotante. Incluso llegaron extranjeros, a quienes, de manera peyorativa, llamábamos «mal llamados». Los comerciantes visionarios comenzaron a construir viviendas y hoteles pequeños para acomodar a los camioneros y operadores que la mina contrataba. Argumentaban que en el pueblo no había suficiente mano de obra calificada para trabajar con ellos.

La Jagua de Ibirico, un municipio de sexta categoría, con solo 8.200 habitantes, era una comunidad dedicada principalmente a la agricultura. Contaba con tres pisos térmicos y 34 veredas, además de tres corregimientos que constituían una despensa agrícola. A pesar de depender en gran medida de la actividad agrícola, la vida en el pueblo era feliz. Las calles empedradas acogían a nuestros campesinos, que vendían sus productos en la plaza de mercado (hoy centro comercial Ibirico Plaza). Fueron tiempos muy hermosos: no faltaba la comida en los hogares, todos nos prestábamos lo que fuera y nos conocíamos.

Con el paso del tiempo, muchas cosas comenzaron a cambiar. Los barbacheros, después de vender el carbón que habían extraído con picos y palas, solían salir los fines de semana para llevar sustento a sus hogares y disfrutar en los establecimientos públicos del pueblo. Sin embargo, en 1997 comenzó la segunda tragedia social. La primera había sido establecida por la guerrilla y había durado muchos años. Comenzamos a ver casas pintadas que anunciaban la presencia de las autodefensas, quienes ordenaban a los ciudadanos que apoyaban a la guerrilla que abandonaran el pueblo.

Es doloroso relatar esto. Las masacres eran frecuentes. Hombres vestidos con *jeans* y armados con pistolas asesinaban a nuestros vecinos y amigos. Caminaban por las calles con armas en mano,

y muchos asesinatos eran selectivos. Esto ocurría en medio de un abandono total por parte del Estado. Para esos años, nadie sabía, por ignorancia y temor, qué hacían en las minas. Solo sabíamos que sacaban carbón en tractomulas y lo llevaban a Tamalameque o Santa Marta. Casi nadie entendía cómo se transportaba realmente ese carbón desde La Jagua. La población se cuidaba de no caer en manos de los paramilitares, quienes se adueñaron del municipio y desplazaron a todos. Y cuando digo todos, me refiero a los campesinos que solían proveernos de alimentos.

Creo que alrededor del 90 % de nuestro sector rural fue desplazado sin piedad por las autodefensas. No quiero hablar más de esto en este libro, porque contarlo aquí es una cosa, pero haberlo vivido fue el mayor horror que cualquier ser humano puede experimentar.

En medio de este escenario, a lo largo de los años, un grupo de ciudadanos decidimos reunirnos para analizar los numerosos problemas ambientales, laborales y sociales que nos afectaban. Entre nosotros había jóvenes que aspiraban a terminar la secundaria y estudiar ingeniería para poder trabajar en la mina. Pero, más allá de eso, queríamos dar voz a nuestras preocupaciones sobre lo que estaba sucediendo en La Jagua. Queríamos que se reconociera a aquellos que habían sido desplazados y que se encontraban en el pueblo buscando una oportunidad para salir adelante.

Mirando la actual Diagonal 1, que antes era la carretera nacional, recuerdo que los líderes de esa época se preguntaban: ¿hasta cuándo continuará la explotación minera? ¿Quién otorgó realmente las licencias ambientales? ¿Qué planes de manejo ambiental existen? No sabemos nada de lo que ordena a estas empresas explotar. ¿Hasta cuándo lo harán? La vía está destruida, los jagüeros no están trabajando como deberían. Nos preguntábamos qué estaba sucediendo y hacia dónde nos dirigíamos. Teníamos un tesoro, el carbón, pero se lo estaban llevando, y La Jagua no avanzaba. En ese momento, recordábamos las palabras del Dr. Rincón, quien nos decía que en las fincas de la base de la cordillera hay mucho «oro negro». Nos preguntábamos quiénes eran los dueños de esas propiedades.

«¡Epaaa!», decía jocosamente don Carlos Mendoza. «El carbón está en la parcela de Quilson Aguilar y Mauro Reales». ¿Qué significa eso?, se preguntaba. Él y el Dr. Rincón levantaban la mirada hacia la cordillera y nos decían: «Dentro de unos años, este pueblo pasará de ser agropecuario a ser minero». Inocentemente, le pregunté al médico: «Y ¿qué trae consigo eso?». Él respondía: «Vendrá al pueblo mucha gente de todos lados del país, incluso del mundo. ¡Sí, como gringos!». «¿Cómo así, señor?», decíamos nosotros. «Pasaremos a ser muchos, el pueblo crecerá muchísimo», nos explicaba.

Ahora entiendo cómo fue el crecimiento poblacional actual de La Jagua. Entre los años 2001 y 2003, las minas estaban en pleno auge. Los grandes equipos de minería ingresaban al pueblo sin control alguno. Vivíamos inmersos en nubes de polvo que dejaban los camiones a su paso. Por otro lado, ya era imposible acercarnos a la mina. No podíamos pescar, ya que el río Sororia no era aquel afluente donde solíamos amarrar una cuerda de lado a lado para cruzar. La pesca en el río Santa Cruz también era imposible, y el río Tucuy, en el que otrora, en épocas de subienda, se pescaba sin dificultad, perdió su caudal de nacimiento y, con ello, sus peces y la cultura de pescar.

Mientras veíamos cómo el carbón se movía ante nuestras narices, La Jagua se llenaba de cantinas y la actividad en la vía principal cambiaba debido a la explotación del carbón. La ciudadanía se pronunciaba tímidamente. Visitábamos la Alcaldía, el Concejo municipal y la Personería; sin embargo, no éramos escuchados. No se tomaban medidas efectivas en respuesta a las voces de los ciudadanos. «¿Cómo es posible que haya tantos trabajadores de fuera, mientras que los jagüeros, los dueños de estas tierras, no podemos trabajar en la mina? La empresa no nos informa nada, no socializa nada. Nadie sabe en realidad cómo se extrae una tonelada de carbón, a qué precio se vende y cuánto beneficio deja al pueblo». Era una época de silencio, en la que a los empleados mineros de fuera solo les interesaba recibir su quincena en sus cuentas bancarias.

Figura 1. Explosión de la mina de carbón a cielo abierto



Normalmente, en La Jagua las hacían a las 12:30 p. m. Sus efectos se reflejan en las grietas de las casas, la contaminación del aire y la pérdida de recursos hídricos. Fuente: fotografía tomada por operarios de camiones, mina La Jagua.

Para mediados de 2006, recuerdo como si fuera hoy que el señor Alfredo Martínez, a quien cariñosamente le decimos *Fello Pipa*, lanzó una crónica a modo de crítica constructiva. En ella, intentaba hacernos entender a los jagüeros el daño que nos causaba el paso de esas 400 tractomulas por la vía nacional, justo al lado del Mango Maldonado. En un día cualquiera, frente a la panadería La Ocañera, donde había un gran hoyo en el suelo, colocaron a una joven sentada en una silla playera, vistiendo un traje de baño como si estuviera en la orilla de un río o una playa. Pude ver cómo la gente se reía al observar lo que nuestros periodistas y camarógrafos hacían, como si estuvieran pescando en una inmensa laguna que se formaba debido al paso de las mulas cargadas de carbón. Aunque muchos nos reímos, en realidad esta fue una forma de protestar ante el sector minero que había iniciado sistemáticamente la destrucción de la vía

nacional, el entorno ambiental y el tejido social, todo bajo la mirada cómplice de los gobiernos nacional, departamental y municipal.

El sociólogo Eligio Ortiz venía informando sobre estos problemas desde los años 2005 y 2006. Señalaba que, aunque teníamos la materia prima y era nuestra, las empresas mineras no querían emplear a nuestra gente. Además, había problemas en educación, salud y agua potable por culpa de la gran cantidad de migrantes que llegaban a La Jagua debido al auge minero, el cual solo traía más problemas.

Eligio tomó el liderazgo en lo que, para muchos, marcó la historia y lo que hoy vemos reflejado en este libro. Aquí comienzan los relatos de todos los que participamos en una gesta que cambió la historia de La Jagua de Ibirico, en el Cesar. Lo que se narra aquí es una historia de la vida real que nos mostrará cómo una comunidad, cansada de que sus derechos fueran violados, se unió para defender su territorio de empresas que llegaron a saquear el Caribe colombiano a costa de nuestras vidas.

Hoy dicen que trajeron desarrollo a los pueblos del centro del Cesar, pero en realidad cambiaron nuestra vocación y destruyeron nuestros ríos, fauna y flora. Hoy tienen una deuda histórica con los territorios de La Jagua, Becerril y El Paso, en el Cesar. Destruyeron los corregimientos de El Hatillo, Plan Bonito y la vereda Mechoacán, en el municipio de La Jagua. Acabaron con nuestros medios de subsistencia y violaron los derechos humanos del corregimiento de Boquerón, encerrándolos en sus propias casas y colocando los vertederos de sus empresas en los patios de las viviendas durante más de 13 años.

Si bien este libro no alcanzaría a plasmar cómo un Estado, complaciente con las multinacionales, llegó a mostrar tal indolencia al no defender a su gente, las comunidades tomamos la decisión de alzar nuestra voz y decirle al mundo entero que el pueblo es superior a sus dirigentes.

Figura 2. Vía que conduce de La Jagua al corregimiento de La Loma



Fuente: Fotografía tomada por el autor del libro en una visita con Carlos Pardo (2016). Nota: Paradoja de la vida, lees en su botadero de material estéril que prohíben la tala de arboles ¿Cuáles arboles?

Capítulo 2. Primer relato: el paro del «10 de febrero»

Le pregunté a Eligio Ortiz sobre su participación en esta protesta social, y él me respondió:

«Empecé hablando con los líderes de la época; algunos estaban de acuerdo y otros no. Saqué una publicidad que decía “hey, hey, hey, contigo, no te hagas el bagre, despierta, nos están jodiendo”, y los invitaba a protestar. Comenzamos una campaña informativa y de resistencia de las comunidades hacia el sector minero».

»Programamos una primera reunión que tuvimos en el restaurante Lili, donde Montaña, el profe Hebert Parodi y yo acordamos otra reunión en el Colegio José Guillermo Castro. En esa reunión, decidimos hacer un paro como protesta social. Los concejales, ni fu ni fa. Allí acordamos tomarnos la vía nacional el 7 de febrero del 2007.

»Salimos a incentivar y motivar a los estudiantes, fuimos de curso en curso. Luego, comenzamos a perifonear desde el barrio Nuevo Milenio y Juan Ramón, invitando a la comunidad. Después del perifoneo, concretamos el comité del paro. También fui a todos los barrios para crear comités de defensa por barrio, lo que le dio fuerza a la idea de hacer un paro. Lanzamos “la hora 0” y nos tomamos la vía en la subestación eléctrica a la entrada de La Jagua, viniendo desde Becerril».

Eligio destacó que, mientras él lanzaba la «hora 0», otros líderes también organizaban sus barrios. Un ejemplo fue Germán Albor, un samario defensor de los servicios públicos, que trabajaba en la mina y era parte del sindicato de los trabajadores mineros de La Jagua. Germán se acercó nuevamente al Concejo municipal y alertó a los concejales de la época para que apoyaran la causa, ya que era necesario defender La Jagua.

Al principio, todo parecía frío, había temor debido a la presencia reciente de las autodefensas en el territorio y la gente aún se cuidaba, pues había reductos de paramilitares en la región. No obstante, el trabajo de todos los líderes había sembrado una semilla de resistencia en la ciudadanía.

Eligio compartió su experiencia: «Una vez iniciada la batalla, nos tomamos la carretera y busqué llegar a la estación de policía, ya que había dejado mi Renault 12 frente a la policía, pensando que estaría seguro allí. Lo que habíamos acordado era llamar la atención del Gobierno nacional, departamental y municipal, pero jamás imaginé que algo tan grande iba a suceder. Corrí por toda la vía nacional en medio de la multitud, con humo por todas partes. Al llegar al estanco Wilkar, me llevé las manos a la cabeza cuando me dijeron que habían quemado mi carro».

Figura 3. Quema de vehículos el 10 de febrero de 2007



Fuente: anónimo.

«Salí por el lado de la casa del señor Regalado, donde ya había muchos carros, pero la sorpresa fue que todos estaban quemados. Al ver mi carro, sentí mucha impotencia y decidí que no debíamos seguir peleando con ellos. En ese momento, se escucharon disparos, y la gente estaba muy enojada. Vi a un policía que disparó su arma hacia arriba, y algunos tiros se escaparon. Esto enfureció aún más a la multitud, y la situación ya estaba tensa debido al asesinato del padre de Héctor Mendoza» quien estaba en la estación de servicio a la entrada del pueblo, y al ver a la multitud que estaba siendo reprimida por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) se sentó a esperar a que todo pasara. En medio del caos, recibió un disparo que le cegó la vida.

Capítulo 3. Segundo relato: el paro del «10 de febrero»

Salí para averiguar lo que estaba sucediendo en la estación de servicio, pero a pocos pasos me encontré con Enides Pérez, quien decidió acompañarme. En ese momento, había mucha gente que venía por la avenida Las Palmas y no sabía que el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) ya estaba enfrentado al pueblo. Enides fue a verificar cómo estaba su familia en casa. Me contó que, en días anteriores, se habían tomado las calles cuadra por cuadra sin enfrentamientos ni contendientes. Pasaron la noche en la subestación eléctrica, donde apareció el sindicato y les llevó una merienda. Enides relata que fue entonces cuando vio a Misael Liz instando a la gente a levantarse en contra de la mina.

Enides era docente en ese momento. Relata que Luis Montaña, Elkin Benjumea, el padre Heráclito Chaparro y Alexander Salazar estaban planificando lo que se avecinaba en la casa de Fidel Parejo. Acordaron la llegada de las instituciones y la posibilidad de que el presidente también estuviera presente, lo cual coincide con lo que decía Jairo Salazar, hermano de Alex. Enides menciona que sintió que la querían apartar del liderazgo, pero nunca entendió por qué, a pesar de que arriesgó su vida. Estas situaciones surgieron debido a las diferentes formas de liderar y coordinar.

Mientras tanto, al dirigirme al colegio donde se había designado para la reunión, me sorprendí al descubrir que unas funcionarias de la Alcaldía ya habían organizado un protocolo para la llegada del presidente y planeaban seleccionar a quienes podrían participar. Las empresas mineras y las delegaciones del Gobierno parecían querer mantener esta reunión a puerta cerrada.

Le pregunté a Enides cómo llegó a ser miembro de la mesa social y cuáles fueron sus propuestas para sentarse con el Gobierno. Ella respondió que propuso inversiones sociales y empleabilidad, ya que en el municipio había un déficit de viviendas muy alto.

Más adelante, cuando aborde la formación de las mesas, explicaré en detalle lo que se acordó con el Gobierno y las comunidades mesa por mesa.

Eligio relató: «Yo regresé nuevamente al puesto de policía, donde me tomaron preso y me metieron en la estación. Vi la situación como peligrosa, estuvimos a punto de ser asesinados. Me arrodillé y le pedí a Dios con mucha fe que me sacara de la estación. Al cabo de un minuto, vinieron a liberarme. El comandante Echeverry se encontraba allí. Me quitó la camisa para que me vieran. Edilmer Muños salió a recibirme y me dijo: “Compadre, le quemaron el carro”. Para mí, eso no fue nada, porque estábamos sentenciados a muerte».

Figura 4. Estación de policía de La Jagua, 10 de febrero de 2007



Fuente: anónimo.

El relato continúa con los eventos durante el paro en La Jagua de Ibirico. Cuando estaban dentro de la estación de policía, la gente que vio salir a Eligio le preguntó si había más personas dentro, y decidieron tumbar la pared para rescatar a todos. Rompieron la pared con piedras y lograron sacar a la gente.

El paro fue una gesta tan significativa que, después de salir de la estación, Eligio se fue a su casa por razones de seguridad y dirigió la situación desde allí. Sin embargo, a pesar de los logros, considera que la empresa Glencore, su filial Prodeco y los gobiernos nacional, departamental y municipal de la época no cumplieron con lo pactado en las mesas de negociación. Siente que faltó un mayor compromiso con las comunidades, aunque se logró cambiar la forma en que operaban en el territorio.

Capítulo 4. Tercer relato: el paro del «10 de febrero»

Miguel Rivero Camacho, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Guarumito, se unió al paro y se ubicó en el barrio 17 de Febrero junto con otros líderes, como Luis Montaña. Dedicó su vida al servicio del pueblo.

Miguel relata cómo se enteraron de la noticia de que habían asesinado a un hombre en el referido barrio. Mientras se dirigían a la protesta, escucharon un disparo, pero pensaron que era una granada de gas lacrimógeno. Sin embargo, cuando llegaron a la estación de servicio, supieron que un hombre, el padre de Héctor Mendoza, había sido asesinado. Esto intensificó aún más la situación en la barricada.

Adanies Quintero, negociador durante el paro, cuenta cómo se acordó con el alcalde y el comandante de la policía quisieron dar paso en la vía, pero después de evaluarlo nuevamente, se dieron cuenta de que debían consultarlo con las comunidades en la barricada. Aunque el comandante había llamado a los líderes en la barricada y les había dicho que abrieran la vía, la mayoría de la gente se negó, y esto enojó a las comunidades. Continuaron con la vía cerrada, y el ministro de Transporte nunca llegó.

La tensión aumentó aún más cuando escucharon la noticia de que el presidente debía llegar con todos sus ministros. Al pueblo no le gustó que intentaran engañarlos de esa manera. Finalmente, el presidente nunca llegó, lo que enfureció a la comunidad.

Adanies menciona que, al día siguiente, después de que él no estuvo presente en la barricada, lo llamaron y se unió a la protesta. Describió la tensa situación con los antimotines y cómo la multitud evitó que la policía se retirara a la estación.

Los líderes y la comunidad en general tomaron medidas para proteger a la gente y evitar el saqueo. Hubo enfrentamientos con la policía y los antimotines, y la estación de policía se incendió, destruyendo vehículos y equipo. La historia sigue mostrando la determinación de la comunidad en la lucha por sus derechos.

Informamos a las barricadas que debían mantenerse firmes, ya que estábamos a punto de alcanzar nuestro objetivo. Transcurrió una larga hora en la que los uniformados se movían de un lado a otro. Uno de ellos nos pidió permiso para llevarse a los policías heridos que estaban refugiados en varias casas. Le dimos luz verde para proceder. Además, Miguel Rivero ya había llevado a la mayoría de ellos hacia Chiriguaná. Nos mantuvimos alerta mientras esperábamos su respuesta. Los ánimos se habían calmado un poco.

Luego, tomamos la carretera descendente en busca de la barricada. Después de enfrentar mucha oposición, golpes y maltratos, se produjo un momento de calma alrededor de las diez de la mañana. Yo tenía un celular para las llamadas. Recibimos una de la barricada, y varios de nosotros, aunque no puedo recordar exactamente cuántos, incluyendo a Jairo y Edilmer, respondimos.

La llamada provenía de la barricada donde Edwin Benjumea se encontraba con su hermano Elkin y Ramisol García. Estos jóvenes estuvieron presentes desde el primer día del paro. Habían instalado una carpa para la sombra, y su centro de mando estaba ubicado en la pared de la subestación eléctrica. Llegamos a su ubicación y descubrimos que habían bloqueado la carretera que conducía a Boquerón desde La Jagua, lo que generó un gran respaldo. La cola de camiones de carga de carbón se extendía casi hasta la entrada de La Victoria de San Isidro. Se corría la voz de que el Gobierno nacional se aproximaba, lo que hizo que los alcaldes de municipios cercanos comenzaran a llegar.

Alrededor de las once de la mañana del 9 de febrero, un grupo de soldados se acercó a la barricada y nos informó: «Mi comandante tiene una respuesta para ustedes». Nuestra respuesta fue firme: «Dígale que venga aquí, porque nosotros no vamos a movernos de

esta barricada hasta que lo haga». El comandante no apareció, por lo tanto, seguimos manteniendo las vías cerradas.

La barricada estaba llena de personas de diferentes lugares: docentes, trabajadores mineros y amigos del sindicato, como Germán Albor Montero, quienes nos alentaban constantemente. Nos decían: «Vamos, muchachos, no se rindan, todavía queda camino por recorrer». Ya era 10 de febrero; tres días sin dormir, prácticamente sin ir a casa. Lo que nunca faltó fue la comida, ya que siempre había personas generosas que cocinaban enormes ollas de sancocho. Además, los sindicatos de Santa Marta nos enviaban refrigerios.

Dado que el oficial no cumplió su promesa de traer al presidente, optó por buscar a otros líderes del pueblo en diferentes lugares y organizar la llegada del presidente por su cuenta. Sin embargo, intentaron hacerlo sin consultarnos a nosotros, los organizadores de la barricada. Cuando nos informaron de esta decisión, les enviamos un mensaje contundente: «Si el presidente no viene a la barricada, el paro continuará. Aquí es donde estamos coordinando todo esto».

Incluso el gobernador de la época se vio forzado a cambiar su ruta, evitando pasar por Bosconia, Chiriguaná y La Jagua. Nuestra intención era clara: llamar la atención y que se escucharan nuestras peticiones.

Después de algunos minutos, llegó una noticia a la barricada. Nos informaron que el presidente vendría, pero solo se reuniría con el alcalde y algunos líderes en el parque principal. Edilmer y Elkin expresaron sus preocupaciones, preguntando qué haríamos si esta gente iba a negociar solo con el alcalde y otros líderes, a quienes prefiero no mencionar para no herir susceptibilidades. Decidimos llamar a la gente, informarles y tomar una decisión firme: si el presidente no venía a la barricada, no se abriría la vía. Cerramos la carretera hacia Boquerón y advertimos, en la entrada de Caño Adentro y la vía a La Palmita, sobre lo que estaban planeando. Todo el mundo estaba comprometido con la idea de que los acuerdos se forjan con el pueblo, no con oportunistas.

Notamos movimientos extraños; camionetas llegaban al final de la fila de autos. Hombres con trajes elegantes y uniformes de empresas

mineras se encontraban entre ellos, pero no los dejamos pasar. Imagínense, en la vía a Las Lajas, pasando Sororia, la mina estaba enviando a los operadores para evitar detener la producción. Camionetas los estaban llevando por la finca del señor Olivella.

«¡Nojoda! ¡Pero no podían burlarse más del pueblo!»

Fuimos a verificar. Efectivamente, los trabajadores estaban siendo trasladados por Las Lajas, un lugar de baño para las comunidades. Cerramos ese punto también. Enviamos un mensaje a la mina: el paro duraría ocho días.

Los movimientos extraños continuaban, y una fila de camionetas se formó en dirección a Boquerón. Enviaron a un vigilante a decirnos: «Señores, los gerentes de las empresas están aquí para resolver el problema. El presidente se dirige a La Jagua, y esto debe detenerse, ya que están afectando la producción y el transporte de carbón». «Vaya y dígame a sus jefes que pueden pasar cuando demos la orden, o de lo contrario, háganlos dar la vuelta por Chiriguaná».

En situaciones como estas, siempre hay quienes intentan sacar provecho en medio del caos, pero el pueblo permaneció allí, en vilo, a la espera de la noticia que se rumoreaba: el presidente estaba en camino.

En el lado derecho de la barricada, muchos coterráneos que se encontraban al otro lado nos suplicaban que los dejáramos pasar. Solo permitíamos el paso a mujeres embarazadas. Allí se hallaban personas de todo el centro y sur del Cesar que habían pasado las noches en el lugar. Sin embargo, cuando les explicábamos los objetivos de nuestro paro, la mayoría compartía nuestra causa. Las anécdotas de ese periodo son innumerables, y entre ellas destaca la del alcalde de Becerril de aquel entonces. Vino con meriendas para nosotros, pero no lo dejamos pasar. El ambiente estaba tan cargado de expectativas que, en cuanto se rumoraba la llegada del presidente, todo el mundo quería estar en primera fila.

Nosotros, los líderes de este paro, teníamos cierta claridad sobre los puntos que debían negociarse, aunque carecíamos de experiencia en situaciones de este tipo. Los temas previamente acordados para la negociación con el Gobierno eran, en su mayoría, definidos entre

los líderes. Incluían el mejoramiento de la vía principal, la prohibición de que las tractomulas pasaran por el centro del pueblo y la regulación del acceso de los residentes de La Jagua al trabajo. Los asuntos ambientales también se encontraban en la lista, aunque con menos concreción.

Los movimientos extraños no cesaban. El gobernador del Cesar llegó desde Valledupar a la barricada y exclamó en voz alta: «Soy el gobernador del Cesar, vengo a hablar con el presidente, que llegará pronto. Permítanme ayudar a resolver estos temas». Nuestra respuesta fue tajante: «Por aquí no podrá pasar. ¿Qué es lo que quieres resolver? Si deseas entrar a La Jagua, tendrás que dar la vuelta por Bosconia, porque por aquí no te será permitido». La barricada era impenetrable. Estaba hecha de llantas en llamas y se alzaba a más de metro y medio de altura de lado a lado.

Capítulo 5. Primera llegada del presidente a La Jagua de Ibirico

Alrededor de las 10:30 de la mañana del 10 de febrero, recibí una llamada en mi antiguo Nokia. «Álvaro Castro, ¿quién habla?». La voz al otro lado dijo: «Le habla Álvaro Uribe Vélez, su presidente». En un primer momento, creí que se trataba de una broma. Sin embargo, enseguida continuó: «Estoy en Pasto, Nariño, y estaré en La Jagua de Ibirico en dos horas. Pero mi seguridad me dice que no hay garantías para que yo llegue a la plaza de la Alcaldía».

Le dije con firmeza: «Si usted es el presidente de Colombia, venga sin temor. La Jagua es un pueblo de paz, a pesar de toda la violencia que hemos vivido. Le recomiendo que haga la reunión con el pueblo, no solo con algunos líderes que no han sufrido estos tres días de lucha. Aquí hay un colegio grande llamado José Guillermo Castro y todo el pueblo puede asistir si así lo desea». El presidente me respondió: «¿Puede proporcionarme el número de Luis Fernando Correa, un funcionario de la presidencia que está allí y al que no han dejado pasar?». Le dije: «Por supuesto, señor». La llamada se interrumpió y me dirigí a mis compañeros, diciéndoles: «Acabo de hablar con el señor Álvaro Uribe, quien afirma que estará en La Jagua en dos horas». Algunos de ellos expresaron su escepticismo, diciendo: «¿De veras? Debes estar bromeando. No vemos ningún movimiento por aquí». Les repliqué: «Voy a acercarme a la barricada, donde hay un hombre que trabaja para el Gobierno. Preguntémosle».

Me dirigí hacia donde estaba Álvaro Miguel, y ya se acercaba un hombre corpulento y bajito con un chaleco de la Cruz Roja. Nos informó: «El señor presidente estará con ustedes y las comunidades en dos horas». Cuando me identifiqué como Álvaro, él añadió: «La

llamada que recibí es del presidente. Permítanme pasar para ayudar a organizar su llegada y asegurarme de que haya condiciones para un consejo comunal aquí en La Jagua». Hablé con mis compañeros, y aunque el funcionario de salud tenía nuestras autorizaciones, la multitud se agolpó alrededor exclamando: «¡No lo dejen pasar! ¡Aquí no pasa nadie!». El hombre insistió: «Soy de la Cruz Roja y traigo suministros médicos que son urgentes para el hospital». «¡No, señor! ¡No lo dejen pasar!», clamaba la multitud.

Finalmente, los compañeros entendieron que era un trabajador de la salud y que solo llevaba un pequeño bolso. Logró avanzar mientras lo acompañábamos, y nos advirtió que debíamos garantizar la seguridad del presidente. Insistió en que la reunión debía ser con el pueblo, pero también debía involucrar a las empresas, alcaldes y al gobernador. «Como sugerencia», nos dijo, «deberían permitirles el paso para que el presidente los comprometa con sus peticiones». El hombre continuó su camino y nos reunimos para tomar decisiones. La gente a la que habíamos dicho que debíamos permitir el paso no estaba dispuesta debido al maltrato que las mineras habían infligido a las comunidades.

Miramos hacia la vía a Boquerón y alguien comentó: «Hay muchas camionetas. No las dejaremos pasar hasta que llegue el presidente, si es que realmente llamó». Estaba de acuerdo con esta precaución, ya que los ánimos estaban tensos y estábamos unidos. Una simple llamada no sería suficiente para que nos tomaran ventaja.

Decidimos enviar a dos personas para investigar si la afirmación del funcionario era cierta. Se dirigieron a la Alcaldía y averiguaron que el presidente sí estaba en camino y que la reunión se llevaría a cabo en el parque principal. Nos preocupó el hecho de que en el parque ya se encontraban fuerzas de seguridad, incluyendo policía, ejército y hombres con chalecos que decían «Presidencia de la República» y portaban armas largas.

La emoción en la barricada se intensificó cuando nos enteramos de que el presidente se acercaba. Desde la vía de La Jagua a Boquerón, un grupo de jóvenes del barrio 17 de Febrero nos transmitió un

mensaje: «Los de Drummond les dicen que deben permitirles pasar para asistir a la reunión con el presidente». Esto desató exclamaciones de sorpresa entre los compañeros, ya que estas empresas raramente tenían presencia en nuestro pueblo. Alguien preguntó: «¿Qué debemos hacer? ¿Deberían dar la vuelta por Chiriguaná o por la vereda Caño Adentro?».

Entonces, aclaré que ni siquiera sabían dónde estaba la vereda Caño Adentro. Esta se ubica en la vía que conecta la mina con La Jagua. Se desvía frente a las palmeras de los Guerra, y los campesinos salen al frente de la bomba de la familia Dita. Lorenzo Torres y yo manteníamos una barricada en ese punto, viniendo desde Chiriguaná a La Jagua.

En medio de esta incertidumbre, una líder del barrio Galán, vecino de la barricada, propuso una idea brillante: si los gerentes de las minas Calenturitas y Drummond deseaban asistir a la reunión con el presidente, debían cruzar la barricada a pie. Esto serviría para que comprendieran lo que estaba ocurriendo en el pueblo, ya que raramente se reunían con las comunidades. Ahora, tenían la oportunidad de estar entre los primeros en la mesa con el presidente, pero debían caminar hasta el parque donde se llevaría a cabo la reunión. Esto fue crucial para asegurar que el pueblo pudiera hacer escuchar sus voces.

Les pedimos a los directivos que bajaran de sus camionetas y esperaran hasta que confirmáramos el lugar de la reunión. No pasó mucho tiempo antes de que recibiéramos otra llamada. «La reunión será donde el pueblo decida», dijo el presidente de la República. Esto nos infundió confianza, y nos indicaron: «Envíen a cinco líderes de la protesta que representen a la comunidad».

Ahí surgió un dilema, ya que todos querían ser parte de esta representación. Finalmente, después de unos veinte minutos de deliberación, se eligieron los cinco líderes. Mientras tanto, Enrique Ríos Manjarrez, quien tenía una camioneta Toyota nuevita, se me acercó con una propuesta intrigante: «Dejemos que los directivos pasen, pero que vayan a pie. Cuando estén llegando a la entrada del barrio

Galán, yo arrancaré la camioneta y les arrojaré polvillo de carbón, de esa clase que las mulas de las tractomulas dejan cuando pasan por aquí». Mi respuesta fue inicialmente de sorpresa y luego escuché: «¡Enrique, eso será histórico, hermano!». Así que los flamantes directivos de las multinacionales descendieron de sus vehículos, aún con sus uniformes impecables, y comenzaron a caminar por la carretera hacia el lugar de la reunión.

Cuando estaban a unos 200 metros de la barricada, Enrique arrancó la camioneta y creó una nube de polvo de carbón que los envolvió. Era el mismo polvillo que las 400 tractomulas diarias dejaban, contaminando constantemente nuestro pueblo. La gente en la barricada aplaudió esta acción, no como algo que estuviera bien, sino como un grito de resistencia contra estas multinacionales que habían deteriorado la relación comunidad-empresa a lo largo del tiempo. Fue un recordatorio palpable de la contaminación que teníamos que soportar todos los días.

En la carpa donde se congregaban los jóvenes que habían apoyado incansablemente esta lucha, surgió la idea de enviar a Elkin Benjumea como representante. Además de él, Alexander Salazar, Germán Albor y otros dos líderes, elegidos por la comunidad, se dirigieron hacia el colegio con un mensaje claro en sus mentes: «Cuidado, no permitan que los seduzcan, porque si lo hacen, la comunidad los repudiará», como enfatizó Miguel Rivero.

Estos jóvenes eran conscientes de que estaban defendiendo a un pueblo que había sufrido mucho, agobiado y engañado tanto por las multinacionales como por los gobiernos.

Mientras estos líderes se dirigían al colegio para la reunión con el presidente, en la barricada seguimos manteniendo las vías cerradas. No cedíamos ante las llamadas o visitas que nos instaban a aceptar acuerdos distintos a lo que habíamos pedido. Nuestra posición era clara: el paro continuaría hasta que nuestras demandas fueran satisfechas. Y, además, exigíamos que, antes de cualquier acuerdo, el presidente caminara por la vía principal para que presenciara de

primera mano la difícil situación en la que estábamos, sometidos por estas multinacionales.

En ese momento, teníamos tres demandas fundamentales: una vía nacional adecuada, oportunidades de empleo y la solución al problema de la contaminación ambiental. El ruido de un helicóptero se hacía cada vez más audible, creando una tensión palpable. Encendimos más neumáticos, ansiosos de que nuestra voz se hiciera escuchar ante el Gobierno central. Éramos un pueblo rico en recursos, pero empobrecido por estas grandes empresas. Carecíamos de agua potable y escuelas adecuadas. Habíamos soportado una serie de alcaldes encarcelados desde 1997 por una mala gestión administrativa. Nuestras calles estaban en la oscuridad, sin alumbrado público. Nadie nos había consultado acerca de una licencia ambiental. A medida que reflexionábamos sobre todas estas injusticias, sentíamos una profunda tristeza. Sin embargo, también teníamos esperanza. Finalmente, se nos presentaba la oportunidad de ser escuchados, y qué mejor momento que ese 10 de febrero de 2007.

El cansancio era evidente en todos nosotros. Llevábamos tres días de protesta sin descanso, tanto de día como de noche. Profesores, familias, comerciantes, estudiantes, sindicatos y prácticamente toda la comunidad, solidaria, se habían unido a esta causa. Habíamos perdido a un vecino en la lucha y la estación de policía había sido completamente quemada. Numerosos agentes de policía resultaron heridos, y la comunidad había sufrido los efectos de los gases lacrimógenos. La administración municipal estaba bajo la influencia de las autodefensas, las cuentas del municipio estaban embargadas y el hospital adeudaba siete meses de salario a sus empleados. No podíamos permitirnos perder esta oportunidad de ser escuchados.

Manteníamos comunicación con la barricada de la entrada por Chiriguaná, donde Lorenzo Torres coordinaba. Nos informó que el alcalde del municipio vecino también estaba solicitando permiso para pasar. Según él, en su municipio tenían problemas similares y esta era una oportunidad única para hablar con el presidente. El

alcalde de Becerril expresó la misma petición, deseando aprovechar esta reunión convocada por los habitantes de La Jagua.

Les dije a los compañeros: «Déjenlos pasar, pero la orden es que no destapemos la vía hasta que la comisión que partió para la reunión con el Gobierno haya llevado al presidente a caminar y le muestre la realidad de la vía nacional. No podemos confiarnos, recordemos lo que nos hizo el ministro que nos engañó diciendo que vendría y nunca lo hizo».

Mientras tanto, en la barricada, había mucha gente de todas partes. El sonido del helicóptero llenó el aire y un silencio expectante cayó sobre nosotros. Especulábamos sobre si el pueblo se uniría para mostrar al presidente que no éramos unos pocos.

En la barricada, teníamos alimentos para cocinar, café y meriendas. Los negocios de La Jagua nos brindaban este apoyo; era como si todo el pueblo se hubiera unido. No había maldad hacia nadie; uno miraba las caras y no veía a extraños ni a nadie que quisiera manipularnos. Esta protesta contra las multinacionales Glencore y Drummond tenía que dar resultados y quedar en la historia de nuestro municipio.

Alrededor del mediodía, recibí una llamada del lugar donde se llevaba a cabo el consejo comunal. Me dijo Jairo Salazar: «Álvaro, te están buscando aquí en el colegio. Debes estar presente». Pregunté quién me buscaba, y me describió a un hombre con chaleco. «Estamos cuidando la entrada porque hay quienes quieren entrar sin autorización, y no lo permitiremos. Así que deberías venir; enviarán a alguien por ti». Les informé a mis compañeros sobre esta llamada, y aunque muchos dijeron que fuera, un grupo se opuso y me rodeó para evitar que saliera.

Finalmente, logré llegar al inicio del consejo comunal, me abrí paso entre la multitud y lo primero que logré ver fue al compositor y folclorista Álvaro Bolaño, que había decidido componer una canción que explicara cómo se inició el paro. Fue en una canción muy escuchada e incluso el presidente pidió que la cantara.

La protesta

Compositor: Álvaro Bolaño López

Vámonos, vámonos para la trinchera
a bloquear la carretera, porque el paro ya estalló.

Se compone o se putea
más está friega, ya esto no hay quien lo detenga
porque el pueblo se cansó.

Sucedieron tantas cosas en esa fecha,
recordar tanta violencia a mí más tristeza me da,
de ver al pueblo metido en la reyerta
esta es la historia completa y aquí la vengo a contar,
de ver al pueblo metido en la reyerta
esta es la historia completa y aquí la vengo a contar,
que los dientes le dañaron a una niña,
que la vida le segaron a un señor,
que al tanque le rociaron gasolina,
pero que el bendito carro no prendió,
que la culpa la tienen la de las minas
que nos dejan solo contaminación,
que de poco al servidor la regalía
y por eso fue que el pueblo se exaltó,
vamos a ponerle las quejas al presidente,
vamos a decirle lo que hizo la policía,
los antimotines ofendieron a la gente,
porque ellos creyeron que aquí suave la tenían,
dispararon gases sin medir las consecuencias,
sin tener en cuenta que a los niños agredían

y así fue que al pueblo se le acabó la paciencia,
y una lluvia de piedras con justicia le caigan,
este era un pueblo que había aguantado con prudencia
pero despertaron al león que en paz dormía,
este era un pueblo que había aguantado con prudencia
pero despertaron al león que en paz dormía.
La esperanza se adueñó de nuestra gente
al escuchar del presidente
mañana yo estaré allá,
media Jagua madrugó para el colegio
nos fuimos a coger puesto para poder protestarle al presidente.

Aproximadamente a las 12:30 p. m., volvieron a llamarme, indicando que el presidente organizaría mesas de trabajo y que sería beneficioso si yo asistía. Acepté y salí a pie, aunque algunos me gritaban que no me fuera de la barricada, argumentando que esto no cambiaría nada después de tantos días de lucha.

Finalmente, alguien que no recuerdo me recogió en una moto y me llevó al colegio. En la entrada, había vallas de control, pero logré pasar después de una revisión. El lugar estaba repleto de personas bien vestidas, y me encontré con los compañeros que habíamos enviado. El presidente había llamado a Elkin Benjumea para que lo acompañara en una mesa de negociación sin protocolo establecido. En la reunión estaban presentes el alcalde, los concejales y varias personas vestidas elegantemente. También encontré a la enfermera jefe del hospital y le pregunté cómo iba todo y en dónde se desarrollaría la reunión. Ella me respondió que se estaban seleccionando a seis personas para que representaran a la comunidad en estas mesas de negociación. Me informó que el presidente, acompañado por varios ministros, se encontraba allí, entre los que pude reconocer a Juan Lozano, conocido por sus apariciones en la televisión, y a Diana Zapata, quien parecía estar junto al presidente.

Joche Jiménez, un destacado líder social de La Jagua, se encontraba cerca de la mesa principal. Él y Elkin presentaron todas las problemáticas de La Jagua. Se decidió crear mesas de trabajo en las que la comunidad participaría activamente eligiendo a sus propios representantes. Se formaron las mesas de Vías, Laboral, Ambiental, Salud y Social. Cada ministro se sentaría con las personas elegidas en un amplio salón del colegio, para escuchar las inquietudes y peticiones de la comunidad. Yo fui elegido para representar la mesa de Salud, lo cual fue aprobado por la comunidad, y me dirigí a la mesa principal.

Al llegar, le informé al presidente que, si no había claridad sobre los puntos que habíamos planteado, el paro no se levantaría. Él respondió: «Tranquilo, tocayo, yo iré donde la comunidad para pedirles que destapen la vía. Primero firmaremos los compromisos y luego nos dirigiremos a las barricadas». Le pregunté si así sería, ya que había varias barricadas. El presidente asintió, y eso nos dio un poco de esperanza.

En la sala principal, vi a un hombre bajito con ojos claros que llevaba gafas y una camisa guayabera. Hablaba con autoridad, y quienes estaban cerca lo escuchaban con atención. Salimos hacia el aula múltiple del colegio, donde se improvisaron mesas con alrededor de diez personas en cada una. Ya había pasado el mediodía. Mientras estábamos allí, recibí una llamada de los compañeros en la barricada, quienes nos informaron que algunos se habían vendido y que no abrirían la vía hasta que se explicara lo acordado. Les dije que se habían formado seis mesas con ministros para abordar los problemas sector por sector. Ellos respondieron: «Diles a los que se vendieron que vengan y expliquen aquí. Si no lo hacen, seguiremos en paro».

Era comprensible que los compañeros en las barricadas sintieran desconfianza, así que acordamos visitar primero las barricadas para compartir los puntos acordados y luego instalar las mesas. Dejamos a cuatro personas en la sala y salimos a socializar con nuestros compañeros en las barricadas. Yo fui hacia la vía a Becerril, y Germán, hacia la vía a La Palmita.

Mientras nos dirigíamos a informar a los compañeros en las barricadas, el colegio aún estaba lleno de gente y muchos afuera nos animaban a no dejarnos engañar por el Gobierno y las minas. Al llegar a la esquina, vi a un grupo de unas 50 personas seguidas por muchos escoltas. Ahí venía Álvaro Uribe, dispuesto a cumplir su promesa de pedir a la comunidad que destapara la vía habiendo hecho compromisos. Declaró que regresaría el 10 de marzo y que deseaba reunirse nuevamente con el pueblo para abordar los problemas de La Jagua.

Yo seguía hacia la barricada en dirección a Becerril, ya solo. En el camino, me levantaron la mano y reconocí a Luis Fernando Correa, Coordinador del grupo de Atención de Emergencias y Desastres del Ministerio de Protección Social. Me preguntó si sería factible que el presidente visitara las dos barricadas, que cuánta distancia había entre una y otra. Le expliqué que estaba a aproximadamente un kilómetro, pero era tarde y debíamos salir por motivos de seguridad. Sin embargo, él aseguró que el presidente estaba muy preocupado por la situación en La Jagua y quería prestar una atención especial a sus problemas. Además, deseaba hacerlo a través de las mesas que habíamos elegido. Se comprometió a mantenerse en contacto para llevar a cabo los seguimientos necesarios.

Cuando varios compañeros y yo llegamos a la estación de policía, presenciamos una escena desgarradora: vehículos destrozados, piedras y neumáticos quemados bloqueando la vía, y soldados custodiando el lugar. Los comerciantes ya estaban limpiando frente a sus negocios. Al preguntarnos por qué íbamos a pie, respondimos que el presidente venía y pasaría por aquí, por lo que debíamos estar alerta. Se habían formado mesas para dar seguimiento a los compromisos acordados y la comunidad todavía se encontraba en el colegio. Él partió con sus escoltas hacia la primera barricada para pedir que destaparan la vía.

Al llegar a la barricada, Migue ya no estaba allí; había ido al colegio. La multitud se acercó y nos preguntó qué había sucedido. Les conté que el presidente realmente había venido y que la reunión seguía en el colegio, donde se habían planteado tres puntos adicionales

a los acordados. Esto generó un desconcierto y desconfianza inicial, pero al saber que el presidente se había comprometido con la comunidad y que regresaría en un mes, se reavivó la esperanza.

Los amigos docentes y del sindicato manifestaron que, si el presidente no regresaba en un mes, volverían a cerrar la vía y tomarían la entrada de la mina. Esto era una amenaza clara y contundente para el Gobierno y las minas. La gente en la barricada se veía agotada, con sus caras cubiertas de polvo y sudor, pero había una chispa de esperanza en sus ojos.

Eran alrededor de las cuatro de la tarde, y el sol estaba a nuestras espaldas en el caluroso pueblo de La Jagua. La fila de piedras, palos y neumáticos tenía una pequeña llamarada. Edilmer Muñoz nos informó que todavía había algunas llantas pequeñas para encender. Estábamos listos para permitir el paso de la gran cantidad de camiones que se encontraban parqueados en la vía, junto con vehículos particulares.

Luis Fernando Correa, volvió a llamar a mi teléfono. En tono amable, me informó que el presidente Uribe solicitaba abrir la vía, ya que se habían firmado preacuerdos en las seis mesas en las que trabajaban los ministros en el colegio. Comunicqué la noticia a los compañeros en la barricada, y al poner el teléfono en altavoz, el presidente se dirigió a ellos. Afirmó que cumpliría su palabra y vendría el 10 de marzo para dar solución a sus peticiones. La comunidad en la barricada estaba escuchando y, al hacer preguntas, algunos expresaron su desconfianza. Después, llamé a Alexander Salazar, quien se encontraba en las mesas de negociación en el colegio. Le contamos la situación y acordamos abrir la vía. Si el presidente no cumplía su palabra el 10 de marzo, tomaríamos medidas más radicales.

La desconfianza crecía en algunos líderes, como Edilmer Migue, quienes proponían que nos dirigiéramos al colegio para verificar si el presidente realmente estaba con Lorenzo en la barricada, y si querían que destapáramos la vía, debían enviar al ejército o la policía para hacerlo. Yo insistí en que había visto al presidente saliendo del

colegio hacia la barricada, pero accedimos a ir al colegio para confirmar los hechos.

En motocicleta, nos dirigimos al colegio, que se encontraba a solo tres minutos de distancia. Al llegar, notamos que la vía hacia Chiriguaná estaba siendo destapada. Encontré a Lorenzo, quien nos informó que se estaban negociando acuerdos en seis grupos formados por funcionarios del Gobierno, líderes del paro, el alcalde y el gobernador. Escuchamos el ruido de un helicóptero despegando de la cancha del colegio. El presidente ya se había ido, pero se nos pidió avisar a la barricada para que destaparan la vía, y junto con las autoridades, se abrió la carretera.

Esto marcó el inicio de la segunda parte de esta historia que dejó una huella imborrable en La Jagua de Ibirico, un municipio asolado por la violencia y la desigualdad a pesar de que estaba generando riqueza para el departamento y el país. Fue necesario un sacrificio humano y heridos para que el Gobierno finalmente se enfrentara a la realidad. Al caminar solo unos metros, cualquiera podía ver el deterioro de la vía y la contaminación causada por la interminable fila de camiones de carga, que no solo arrojaban contaminantes, sino que también generaban problemas sociales.

Los gobiernos de Virgilio Barco, César Gaviria y Ernesto Samper, bajo el discurso de la apertura económica, priorizaron lo que posteriormente Juan Manuel Santos llamaría la «locomotora minera». Las comunidades nunca participaron en un proceso de socialización de las licencias ni en la elaboración de un plan de manejo ambiental. Lo que se conoció fue que estas empresas mineras elaboraron estos documentos para su propio beneficio, sin considerar el impacto en las comunidades. La Ley 9 de 1993, que fue perjudicial para el territorio, y el Código de Minas, Ley 685, beneficiaron a Glencore y Drummond, en lugar de proteger a la población y su entorno.

Al ingresar al colegio y ver a mis compañeros de lucha, sentí una mezcla de sentimientos. Habíamos salido a defender nuestro territorio, pero ahora solo éramos seis personas, además del alcalde y los concejales, quienes debíamos liderar el cumplimiento de los

acuerdos. Entre los presentes se encontraban Reginaldo Peralta, José Jiménez, Eligio Ortiz, Germán Albor (q. e. p. d.), Alexander Salazar, Elkin Benjumea y Gildardo Vásquez, presidente del Concejo municipal. Los sindicatos, profesores, personal del hospital y muchos otros también estaban presentes.

Capítulo 6. Compromisos del Estado con la comunidad y las propuestas de las mesas de trabajo

Me asignaron liderar la Mesa de Salud junto al entonces ministro Diego Palacios. En la Mesa de Vías, se encontraba el ministro Uriel Gallego, mientras que las empresas estaban representadas por Guillermo Salgado y Alfredo Araujo. Cada uno tenía sus acompañantes y funcionarios del Gobierno que tomaban nota de los primeros compromisos de esa reunión. Nuestros objetivos principales eran poner fin al tráfico de camiones de carga por la vía nacional, generar empleo para nuestros jóvenes y entender de manera clara cómo funcionaban estas empresas en nuestro territorio.

Luego de un día largo de negociaciones en las mesas del 10 de febrero, que se extendieron hasta las siete de la noche, los funcionarios del Gobierno se quedaron y les ayudamos a encontrar hoteles donde alojarse. Esto contribuyó a generar un poco de confianza en las mesas de diálogo. El primer compromiso fue la fecha del 10 de marzo de 2007. Este era un hito importante para fortalecer la confianza con las comunidades y se establecieron varios acuerdos.

Uno de estos acuerdos fue la creación de una matriz de evaluación y cumplimiento para hacer seguimiento a los compromisos. Además, se acordó que, junto con el alcalde, los líderes locales ayudarían a garantizar el cumplimiento de estos acuerdos. Por nuestra parte, nos comprometimos a no permitir que se volviera a cerrar la vía hasta la llegada del presidente.

Así que organizamos mesas de trabajo que se alinearon con las demandas planteadas el 10 de febrero, con el deseo de que el mes pasara rápidamente para recibir al presidente en marzo. Ese mes se

sintió como el más largo de nuestras vidas, ya que había voces en la comunidad que dudaban de si el presidente cumpliría su promesa.

Después de unos tres días, comenzaron las llamadas del Gobierno. Nos dijeron que prepararíamos nuestras peticiones bien fundamentadas, ya que el presidente había ordenado que la reunión en La Jagua se convirtiera en el Consejo Comunal 155 del Gobierno nacional. Esta fue una noticia positiva para nosotros, ya que era una política de este gobierno dar atención especial a los consejos comunales establecidos por el presidente y estos tenían carácter obligatorio.

Nos organizamos en seis mesas de trabajo y nombramos coordinadores generales y para cada mesa, acompañados por, al menos, cuatro líderes adicionales, para garantizar la representación de la comunidad. Las mesas se dividieron en:

- Mesa Social: coordinada por Enides Pérez Aguilar.
- Mesa Laboral: coordinada por Alexander Salazar Ávila.
- Mesa Medio Ambiente: coordinada por Elkin Benjumea.
- Mesa de Vías: coordinada por Jairo Salazar Ávila.
- Mesa Agricultura: coordinada por Reginaldo Peralta.
- Mesa de Salud: coordinada por Álvaro Castro Meriño.

Nos declararon en sesiones permanentes y contamos con el apoyo de un concejal llamado Luis Antonio Montaña, quien había apoyado a las comunidades durante la protesta. Por parte del Gobierno, nos acompañaron la doctora Diana Zapata, quien actuaba como la agenda del presidente; el doctor Luis Fernando Correa, experto en prevención y desastres; Uriel Gallego, ministro de Transporte; Juan Lozano, ministro de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y el doctor Diego Palacios, ministro de Protección Social.

Es importante destacar que estos equipos de trabajo fueron nombrados por las comunidades y el Gobierno municipal, con la aprobación del presidente Álvaro Uribe Vélez. Este fue el equipo que se encargaría de llevar adelante los compromisos acordados en las mesas de diálogo.

La propuesta de crear dos nuevas mesas, una Mesa de Agua y Servicios Públicos, debido a la escasez de agua potable y la deficiente calidad de los servicios públicos brindados por Electricaribe, y una Mesa de Compensación por Sustracción de las Reservas de Carbón, por los crecientes problemas ambientales causados por la extracción de carbón, fueron muy relevantes y necesarias para abordar las cuestiones apremiantes que afectan a la comunidad de La Jagua. Estas propuestas demuestran una comprensión sólida de los problemas fundamentales que enfrenta la población y buscan crear soluciones efectivas. Por lo tanto, estas dos mesas nuevas fueron aprobadas por el Gobierno nacional y entraron a hacer parte de los compromisos que se habían establecido en el consejo comunal.

Fue importante que estos temas se trataran en mesas separadas, ya que tienen sus propias complejidades y desafíos específicos. Al formar estas mesas y llevar estas propuestas a la reunión programada para marzo, la comunidad demostró un enfoque estratégico para abordar sus preocupaciones y buscar soluciones concretas para mejorar la calidad de vida en el área de influencia.

En particular, las solicitudes de la Mesa Laboral y Sena eran esenciales para garantizar que los jóvenes tuvieran acceso a una formación técnica y tecnológica relevante para la industria minera, lo que podría aumentar sus oportunidades de empleo. Además, la creación de una oficina del Ministerio de Trabajo y una oficina de empleo por parte de las empresas mineras era un paso importante para proteger los derechos laborales de los trabajadores y facilitar el acceso al empleo. Asimismo, era clave la transformación del Sena para brindar a los jóvenes del territorio oportunidades laborales, ya que solo existían cursos complementarios en esa época. Esta mesa propuso traer una escuela de formación con simuladores de camión minero para apoyar a los jóvenes del corredor minero, y también la participación de los comerciantes en la venta de bienes y servicios a las empresas.

Las peticiones presentadas por la Mesa tenían por objeto mejorar las condiciones de vida de la comunidad, incluyendo la vivienda y la infraestructura básica. Además, la solicitud de una brigada de

libretas militares, la masificación del gas natural y el mejoramiento de viviendas eran medidas que podían mejorar significativamente la calidad de vida de los habitantes.

La Mesa Ambiental hizo varias propuestas, entre las cuales estaban: exigir que el plan de manejo ambiental de las empresas mineras sea socializado y discutido con las comunidades; la creación de la EIAE (Evaluación Integral Ambiental Estratégica) que le permitiría al Ministerio de Medio Ambiente conocer la situación del municipio en los temas ambientales y así generar proyectos para los municipios del eje minero; solicitar al Ministerio de Medio Ambiente declarar a la Jagua como área fuente de contaminación; retirar la trituradora Las Cumbres de la orilla de la vía nacional, ya que, al triturar el carbón, contaminaba la vía y los residuos llegaban hasta el casco urbano del municipio; la instalación de equipos de monitoreo para medir la calidad del aire que respirábamos; y reforestar la cuenca media del río Tucuy con financiación de una bolsa en donde todas las empresas aporten recursos para proteger a los campesinos del corregimiento de la Victoria de San Isidro.

La Mesa de Salud solicitó una evaluación a través de un tamizaje por parte de expertos como neumólogos internistas y médicos generales, porque había muchas personas enfermas de gripa, rinitis e IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas). Además, se solicitó la construcción de una sala de terapia respiratoria en el hospital de primer nivel de la Jagua. Por último, se exigió un estudio epidemiológico para conocer el estado de salud de los jagüeros.

La Mesa de Agricultura pidió evaluar el sector campesino. Manifestaron su preocupación por la falta de vías rurales que afectaban las cosechas, las cuales se perdían. La zona rural no contaba con el servicio de luz y los campesinos padecían el abandono del Gobierno central, departamental y municipal, por lo que solicitó un banco de maquinarias y la implementación de proyectos productivos para los campesinos de La Jagua.

La Mesa de Vías pidió la construcción de la vía nacional Avenida Diagonal 1, la vía La Jagua-La Loma, la interconexión rural y la vía

La Jagua-Rincón Hondo, que era una trocha en mal estado por donde pasaban alrededor de 400 tractomulas cargadas de carbón.

La Mesa de Compensación, alineada con la Ambiental, solicitó la protección de los ríos Sororia, Tucuy y Santa Cruz, y la implementación de la EIAE. Algo importante de esta mesa fue que desde ese entonces se centró en exigir proyectos de reforestación ante los futuros planes de cierre minero.

La Mesa de Agua y Servicios Públicos pedía a gritos al Gobierno nacional agua potable para el municipio, el mejoramiento de las redes de suministro del casco urbano y la construcción de un verdadero acueducto. Adicionalmente, le reclamó a Electricaribe la falta de alumbrado público en el municipio.

Era esencial que estas peticiones se presentaran al Gobierno y se siguiera presionando para su cumplimiento.

Estas medidas tenían el potencial de marcar un cambio significativo en el municipio y mejorar la Calidad de vida de sus habitantes. La coordinación y el trabajo conjunto de la comunidad, los líderes locales y el Gobierno son cruciales para lograr estos objetivos y garantizar un futuro mejor para La Jagua de Ibirico.

La determinación de los miembros de las mesas de trabajo y su compromiso con la causa social eran impresionantes. El hecho de que se hayan unido para insistir en que todos los miembros de las mesas fueran admitidos en la reunión con el presidente Uribe y su gabinete era un ejemplo de cómo la comunidad de La Jagua defendió sus intereses con valentía. Los jagüeros demostraron que, a través de la unidad y la persistencia, pueden lograrse cambios significativos.

Llegaron al municipio figuras políticas a «apoyarnos». Las acciones de la comunidad atrajeron la atención y ayudaron a presionar al Gobierno para que atendiera sus necesidades.

La insistencia de cerrar la mina si el gobierno de Uribe no llegaba a la segunda reunión, testimonia la profundidad del compromiso de la comunidad para lograr un cambio y refleja la importancia de abordar las preocupaciones y necesidades de la comunidad de manera significativa.

Las mesas se caracterizaron por la organización efectiva. Su creación con líderes y coordinadores designados brindaron un enfoque estructurado y organizado para abordar las preocupaciones de la comunidad.

La participación del Gobierno y representantes de las empresas en las mesas de trabajo fue fundamental para garantizar que se escucharan todas las voces y que las soluciones fueran viables.

La articulación de las propuestas entre las mesas mostró la seriedad y la determinación de la comunidad para lograr un cambio significativo. La inclusión de Pedro Díaz y otros compañeros en este proceso de preparación fue importante, ya que lograron proporcionar argumentos sólidos y fundamentados para respaldar estas propuestas.

El hecho de que otras localidades como Becerril, La Loma y Chiriguaná comenzaran a buscar la asesoría de los líderes de La Jagua para abordar sus propios problemas muestra que la comunidad estaba emergiendo como una fuerza influyente.

Las dificultades experimentadas en los primeros años con el saqueo de las regalías por parte de grupos paramilitares (quienes coaccionaban a los alcaldes para hacerlo) y los problemas de corrupción en el Gobierno local subrayan la complejidad y las amenazas que enfrentaba la comunidad por la explotación del carbón. Las amenazas a los alcaldes para entregar las regalías son una señal del desafío que suponía el control de los recursos provenientes de la explotación de carbón.

También resultó fundamental la toma de conciencia sobre el papel que desempeñan los líderes locales en este proceso. La Jagua estaba destinada a desempeñar un papel importante en la negociación y el diálogo con el Gobierno, lo que refleja una creciente responsabilidad para abordar los problemas y aspiraciones de la comunidad.

Capítulo 7. Lo que despertó al león

Muchos eran conscientes de que estábamos sometidos por la violencia del Estado. Lo que no sabíamos era que Glencore nos tenía hundidos también porque nos arrebató nuestros medios de subsistencia y nuestra vocación, que hasta 1990 fueron 100 % agrícolas.

Recuerdo que, en 2006, debido a mi profesión, trabajaba en el hospital local como enfermero de la ambulancia, y nos debían siete meses de sueldo. En esa época, el hospital llevaba las cuentas de cobro a la Secretaría de Salud municipal, y allí se quedaban. A pesar de que el municipio ya recibía regalías, seguía siendo de sexta categoría y no podía pagar al hospital. Había muchas demandas y todas las cuentas estaban embargadas, incluso las de salud. Solo existían dos bancos, el recién llegado Banco de Bogotá y el Banco Agrario.

Las calles estaban llenas de tierra debido a la entrada constante de cargadores, motoniveladoras, vibrocompactadores y más de un centenar de camionetas que salían de la mina La Jagua, cargadas de material particulado que se depositaba en las calles. Además, los conductores lavaban las camionetas en las puertas de las casas. Era un orgullo para los pocos trabajadores portar un uniforme y un casco, y, por supuesto, manejar equipos de minería. El comercio prosperaba, y los jagüeros empezaron a construir habitaciones con aire acondicionado para alquilarlas por turnos. A menudo, hasta tres hombres compartían una habitación, dependiendo de los turnos que la empresa les asignara. Una sola habitación podía generar hasta 400.000 pesos mensuales para el propietario. Los hijos de los campesinos planeaban estudiar hasta noveno grado para ingresar al Sena y convertirse en operadores, mecánicos o vigilantes, con algunos incluso aspirando a ser ingenieros para ganar mucho dinero.

El médico Jorge Isaac Rincón Torres, que llegó muy joven a La Jagua, nos comunicó sus conocimientos y experiencias vividas en otros municipios. Siempre pronosticó cómo sería este municipio minero, con uniformes de todos los colores y autobuses que recogían a los trabajadores en la puerta de sus casas. Sin embargo, la mayoría de estos empleados mineros no eran de la localidad, hecho que solo se hizo evidente al inicio de la organización del paro. Descubrimos que más del 80 % de ellos venía de otras partes del país, pero nos conformábamos con ser lavadores, algunos operadores y muy pocos empleados en la parte administrativa de la mina.

Como mencioné al principio de este libro, los operadores de las tractomulas gastaban su dinero en restaurantes, llanterías y otros establecimientos. Lo que preocupaba especialmente al personal de salud era que muchas niñas adolescentes quedaban embarazadas. Había casos de VIH, y el perfil epidemiológico de 2008 ubicaba a La Jagua como el tercer municipio con más casos de VIH en el departamento. Estábamos en un estado de caos social. Recuerdo que, cuando llegaron unos polacos a trabajar a la mina Carbones del Caribe, enviaban las camionetas a bares o lugares de entretenimiento para recoger a las mujeres y llevarlas a la mina para pagar por sus servicios. Esto era aplaudido por los directivos de la empresa.

Nos dimos cuenta de todo esto y había un gran temor. En 2006, apenas se iban los paramilitares en el proceso de reinserción y aún había presencia de ellos en el pueblo. Las negociaciones con el Gobierno nacional no serían fáciles. Desconocíamos cómo debíamos actuar. Afortunadamente, gracias a la sabiduría de los jagüeros, iniciamos un aprendizaje que, hasta hoy, nos ha llevado al cumplimiento del 85 % de los compromisos del Gobierno. Cabe mencionar que la empresa Glencore, a pesar de que el Gobierno la obligó a relacionarse con las comunidades, no ha cumplido ni siquiera el 55 % de los compromisos en temas ambientales y siguió explotando nuestro territorio.

Capítulo 8. Segunda llegada del presidente y su gabinete

Para el 27 de febrero, comenzamos a preparar dos cosas: las peticiones y el próximo paro en caso de que el presidente no viniera en la fecha acordada. Nos dirigimos al Concejo municipal, donde contábamos con el apoyo de los concejales, y dejamos listo lo relacionado con la próxima visita del presidente.

Recibimos una llamada de la Presidencia de la República en la que nos solicitaron un listado de los líderes coordinadores por mesa. Nos informaron que enviarían una metodología de trabajo y que necesitaban que nosotros garantizáramos un avance en nuestras acciones. A su vez, se comprometieron a asegurar que los acuerdos y las peticiones realizadas por nosotros se cumplieran. Sin embargo, subrayaron que las empresas, la gobernación y el municipio debían cumplir con su parte, y que contáramos con el apoyo de todos los ministros, incluyendo la Oficina de Regiones de la Presidencia. Esta noticia generó confianza en las mesas de La Jagua, aunque no estábamos completamente convencidos, ya que había que ver si cumplirían con sus compromisos.

Los municipios vecinos enviaron líderes para averiguar si podían unirse a la mesa, pero inicialmente les dijimos que esperaran a nuestra segunda reunión. Hasta ese momento, habíamos luchado solos, con la ayuda del pueblo, y la prioridad eran nuestras propias peticiones.

El 5 de marzo de 2007, enviamos el listado de los líderes que participarían, ya que la llegada del presidente estaba confirmada. Nos estábamos preparando para el día 10 de marzo. Esta nueva visita movilizó a gente de todas partes del Cesar, incluyendo aquellos que querían figurar, hablar con el mandatario o simplemente sacar pe-

cho pese a no haber hecho nada. Llegó el día y había una gran diversidad de personas en la plaza principal, donde se llevaría a cabo el consejo comunal. Todo estaba listo, y creíamos que solo vendrían los ministros. Sin embargo, un helicóptero rompió el silencio y, efectivamente, llegó el presidente.

Teníamos solo cinco minutos por mesa para presentar nuestras peticiones. Todo se transmitía en directo por el canal Señal Colombia. Nos reunimos antes de comenzar con la funcionaria de Presidencia. Todo estaba organizado para que la periodista tuviera el orden de las intervenciones. Acordamos que Joche Jiménez, nuestro coordinador, comenzaría solicitándole al presidente y a sus ministros la creación de dos nuevas mesas: «Agua y Servicios Públicos» y «Compensación por Sustracción de las Reservas de Carbón». Él argumentó que, para poder avanzar, era crucial aceptar estas dos nuevas mesas, puesto que muchos problemas podrían abordarse a través de ellas.

La plaza principal estaba preparada y contaba con la presencia de personalidades de todo el Cesar, incluyendo representantes de las empresas mineras. El Gobierno los invitó debido a las quejas sobre su mala relación con las comunidades. La voz del presidente atraía a todos y había un deseo general de figurar. Este evento marcó un hito en el futuro de los jagüeros.

Las coordinaciones de las ocho mesas presentaron las peticiones acordadas por los representantes de las comunidades. Para cada petición, el Gobierno asignó una especie de padrino por mesa. Recuerdo claramente que cuando el Gobierno aceptó las dos nuevas mesas, hubo una discusión con el presidente del Concejo municipal. El presidente obligó a la corporación a presentar un acuerdo municipal en el que el municipio se incorporaría a una figura llamada Aguas del Cesar, que se encargaría de construir un nuevo acueducto y de la potabilización del agua. Gildardo Vázquez no estaba de acuerdo, ya que consideraba que esta figura significaba la privatización del servicio. El debate se caldeó con la presencia de la población, pero no hubo manera de cambiar la decisión del Gobierno.

Tras cada una de las intervenciones y con la asignación de un ministro por mesa, el presidente tomó la palabra. Recuerdo sus palabras textuales al comienzo, dirigiéndose al alcalde en turno. Le indicó que debía poner a disposición de las mesas una oficina con acceso a Internet, computadoras y medios de transporte, porque seríamos nosotros quienes velaríamos por el cumplimiento de esos compromisos sociales a partir de ese momento. Desde ese 10 de marzo, el presidente también establecería una oficina especial en Bogotá para hacer cumplir las peticiones. Lo que el Gobierno no supo en ese momento fue que el alcalde en funciones fue reemplazado poco tiempo después y esa oficina prometida nunca existió, al menos no durante el año 2007.

En ese consejo comunal, se emitieron órdenes que beneficiarían a La Jagua. Sin embargo, otro municipio que se benefició fue Chiriguana, en el Cesar. Recuerdo que su alcalde logró asegurar recursos importantes para su hospital, y estos fondos se destinaron, en parte, debido a la crisis económica y estructural que atravesaba el hospital del municipio vecino.

A partir de este momento, quiero continuar mi relato destacando cómo las mesas de trabajo instaladas en este evento marcaron un cambio en la historia de La Jagua. Desde un principio, se acordó que al finalizar la reunión, todos los actores involucrados, incluyendo las empresas mineras, el departamento, el municipio y la comunidad, tenían la tarea de verificar que todo se cumpliera a cabalidad. En ese momento, el presidente brindó un apoyo claro y urgente. La primera orden fue revisar el desmonte gradual de las tractomulas y el paso por el casco urbano. También se contempló la posibilidad de construir una línea férrea para que la mina La Jagua pudiera sacar el carbón sin contaminar las carreteras del centro del Cesar.

El día culminó con estas órdenes y la creación de las ocho mesas de trabajo, bajo la responsabilidad de los representantes elegidos, encargados de garantizar que se cumplieran los compromisos acordados y firmados por todos los involucrados. Cada ministro tenía la responsabilidad de mantener un contacto constante con

cada coordinación y de informar al presidente sobre los resultados de las tareas encomendadas. Además, el presidente prometió volver a La Jagua en diciembre para verificar el cumplimiento de estos compromisos. Fue notable que, en el transcurso de un año, Álvaro Uribe Vélez visitó La Jagua de Ibirico en tres ocasiones, aunque las comunidades desconocían que la mayor parte de esos acuerdos, que mencionamos más adelante para revelar la verdad, se debían en gran parte a su liderazgo y que sus ministros eran quienes acompañaban en la implementación.

Capítulo 9. Retos y fracasos de las mesas

Durante la semana siguiente del 10 de marzo, los 30 miembros nos dedicamos a preparar todos los aspectos necesarios. Creamos una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) en la que, por mesa, con la ayuda de los funcionarios asignados, establecíamos fechas para lograr resultados. El presidente delegó a una señora llamada Diana Zapata como enlace de comunicaciones. Ella nos llamaba todos los días, solicitaba información, coordinaba citas con los ministros y se convirtió en la línea de comunicación directa con el Gobierno nacional.

Por otro lado, ya habíamos nombrado al coordinador general. Convocó a sesiones permanentes para avanzar en las tareas, ya que algunos eran escépticos respecto a lo que se avecinaba para el pueblo. Sin embargo, era evidente que nuestras acciones estaban surtiendo efecto y comenzamos a ser escuchados. En una de nuestras reuniones permanentes, surgió la idea de que la mesa debería tener un enfoque regional. Propusimos visitar los cinco municipios del eje minero para unirnos en torno a causas comunes. Lo que no sabíamos en ese momento era que esta idea sería infiltrada por las empresas. Por ejemplo, a un líder de Chiriguaná que se oponía a las empresas le ofrecieron un contrato de reforestación para silenciarlo. En Becerril no ocurrió lo mismo, pero nunca obtuvimos una audiencia justa. En contraste, el corregimiento de La Loma escuchó nuestras propuestas y sigue defendiendo su territorio. En el caso de Codazzi, tuvimos menos éxito y no pudimos consolidar la idea regional. De haberlo logrado, nos habríamos fortalecido como comunidad en esos años.

Regresamos con la determinación de defender lo nuestro y pusimos en marcha un plan para atraer la atención de las multinacionales hacia La Jagua de Ibirico. La situación era complicada; las regalías

estaban congeladas en nuestro municipio y, para invertir en los compromisos acordados, debíamos utilizar estos recursos que el Gobierno había retenido debido a la corrupción, para evitar que se perdieran. Nos vimos obligados a buscar una figura jurídica que permitiera al Gobierno central verificar si se estaban invirtiendo adecuadamente o no. Desde el lado de las multinacionales, el paro generó descontento porque las obligó a acercarse a las comunidades que habían ignorado durante mucho tiempo. Por parte de las mesas de trabajo, teníamos la intención de hacernos visibles, lo que llevó a posiciones radicales y dificultó las negociaciones. Mis compañeros coordinadores mantenían una posición firme que dio como resultado la consecución de 25 logros que ningún alcalde de la época había logrado.

José Jiménez propuso que, para que los acuerdos con el Gobierno fueran transparentes, deberíamos ir a Bogotá un mes, y al siguiente mes el Gobierno vendría a La Jagua. Esta propuesta fue respaldada por los 30 miembros, que asumieron el desafío de hacer cumplir los compromisos. Sin embargo, no todo era sencillo. A los dos meses de terminar el paro, nuestro compañero fue amenazado y su vida cambió drásticamente. Ahora tenía escolta y a todos nos instaron a abandonar la defensa de lo que algunos llamaban «lo indefendible».

Era año electoral y las campañas políticas estaban en marcha. Aunque éramos líderes naturales, decidimos en una reunión de los 30 miembros que aquellos que quisieran hacer política deberían hacerlo por fuera de las mesas, ya que dentro debíamos mantenernos apolíticos a pesar de nuestras preferencias personales.

Por mi parte, yo trabajaba en el hospital del pueblo como paramédico de la ambulancia y mis descansos se dedicaban a las mesas de trabajo. Empezamos a ver los resultados de los acuerdos, y cada coordinador estaba comprometido. El Gobierno venía mensualmente a verificar que cada mesa cumpliera con sus compromisos. Sin embargo, no pudimos ir a Bogotá en el primer año, ya que el alcalde no nos brindó la oportunidad y nadie tenía recursos para hacerlo. Presentamos quejas, pero el Gobierno argumentó que era inaudito que no recibiéramos apoyo. Fue entonces cuando surgió la

idea de buscar una figura jurídica para asignarnos recursos y asistir a las reuniones con el alto Gobierno. Queríamos institucionalizar las mesas, pero en 2007 no fue posible. Era lamentable ver que ni la Gobernación ni la Alcaldía facilitaban siquiera los pasajes en autobús. La verdad es que teníamos una sola oportunidad: retirarnos de las mesas y entrar en la política para apoyar a nuestros compañeros. Así que me retiré y me postulé a concejal para el periodo 2008-2011; lo mismo hizo Luis Montaña, quien fue el creador del Acuerdo Municipal 003 de febrero de 2008. Agradecemos a todos los concejales de ese periodo, pues aprobaron ese acuerdo. Aquí comienza una nueva etapa para las mesas de trabajo de La Jagua de Ibirico. Todos celebramos, incluyendo el Gobierno nacional.

La única forma en que las mesas fueron escuchadas fue a través de estos dos concejales, quienes nos permitieron obtener recursos para las visitas de seguimiento.

Puse mi credencial a disposición del pueblo y unos meses más tarde fui elegido para ser el enlace entre la Presidencia de la República y La Jagua de Ibirico. A este cargo se le llamó coordinador general de las mesas de trabajo, un cargo que todavía existe, así como la veduría en la actualidad.

Capítulo 10. La lucha por la supervivencia de las mesas de trabajo

En esta nueva etapa de mi relato, quiero ofrecer a los lectores una visión detallada de cientos de párrafos que están disponibles en los archivos de la Oficina de las Mesas de Trabajo. Estos relatos, que son testimonios de la vida real, son esenciales para entender el contexto y los eventos que marcaron la historia de La Jagua de Ibirico.

Las mesas de trabajo estaban siendo presionadas por actores que no tenían interés en cumplir con las órdenes de los ministerios a favor de las comunidades. Esto llevó a la amenaza contra nuestro primer coordinador y su posterior retirada del pueblo. Él prefirió cuidar su integridad y la de su familia. Con todo y la falta de apoyo del Gobierno local, los 29 líderes restantes continuamos luchando.

Nos reuníamos para planificar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de cada mesa. Citamos al alcalde de ese entonces (2008), Alfonso Palacio Niño, quien entendió la importancia de las mesas de trabajo. Luego, fuimos al recinto del Concejo municipal y, con el apoyo de todos los miembros de las mesas, solicitamos al presidente Luis Montaña presentar un «proyecto de acuerdo» en el Concejo para institucionalizar las mesas y darles existencia social y jurídica con el apoyo del alcalde.

El Acuerdo fue presentado y tuve el honor de ser el ponente en la comisión, donde se votó de manera favorable. Tres días después, en la sesión plenaria del Concejo, fue aprobado por unanimidad por los 13 concejales. Este culminó en el Acuerdo Municipal 003 del 10 de febrero de 2008, aún vigente. La historia de este municipio les agradecerá este acto valiente de apoyo a quienes, en ese momento, comenzaron a defender el territorio.

El acuerdo municipal fue sancionado. Uno de sus artículos expresaba claramente el apoyo total a las mesas de trabajo y la asignación de recursos mínimos para su funcionamiento¹.

La Secretaría de Gobierno de la época se puso a disposición de las mesas de trabajo. Decidimos crear un reglamento interno para garantizar que nadie se desviara de su compromiso de hacer cumplir los acuerdos pactados con el presidente y sus ministros. Propuse en el presupuesto municipal la inclusión de un artículo que permitiera a la Oficina de Gobierno y Desarrollo Comunitario asignar los recursos mínimos para los gastos. Esto se debía a que durante los primeros ocho meses no pudimos ir a Bogotá para hacer seguimiento a los acuerdos.

En la Oficina de Regiones de la Presidencia, los coordinadores de cada mesa serían los únicos en representar a La Jagua. Nadie más quería apoyar si no se les pagaba, ya que no podían trabajar de manera gratuita. Fue un desafío, pues solo 29 personas decidimos hacerlo sin recibir un peso, pero esta decisión fue crucial para sacar al pueblo del abandono en el que estábamos sometidos.

El Gobierno continuó con la designación de Diana Zapata como nuestro enlace, de quien recibimos información valiosa. Creó una matriz de seguimiento que especificaba las fechas de inicio y finalización de cada compromiso por mesa. Establecimos una pequeña oficina en mi casa y contratamos una secretaria, Alba Amador, que trabajó de manera gratuita porque no podíamos pagarle un salario. Le proporcionábamos apoyo económico de los viáticos que la Alcaldía daba a los coordinadores para viajar.

Con la oficina y la secretaria, cada miembro tenía un lugar donde reunirse con su equipo. Cada coordinador tenía a su lado a otras cuatro personas que lo apoyaban desinteresadamente. Fue un compromiso en el que ningún miembro de las mesas buscó beneficiarse

1. Acuerdo 003 de 10 de febrero de 2008. Se puede consultar el Acuerdo en los archivos del Concejo municipal de La Jagua de Ibirico y los archivos de las mesas de trabajo.

personalmente, un acto de valor civil que aún no ha sido completamente reconocido en el pueblo.

Recientemente, hablaba con Eligio Ortiz, quien perdió su automóvil durante el paro y que actualmente vive del día a día. Nos preguntábamos cómo era posible que las mesas de trabajo fueran tan marginadas por los Gobiernos locales, a pesar de que esta veeduría, surgida tras la protesta, trajo regalías, proyectos, estudios y desarrollo para La Jagua. Los archivos de la Presidencia de la República muestran que fuimos declarados la mejor veeduría del país en 2010. Sin embargo, la satisfacción de los miembros radica en haber servido a la comunidad.

Viajábamos a Bogotá en autobús, lo que nos llevaba 18 horas, con gastos de hotel y comida, para exigir al Gobierno que obligara a las empresas a cumplir sus compromisos. Estas empresas, llenas de resentimiento, comenzaron a visitar el pueblo para mostrarnos cómo explotaban sus minerales y cómo podrían dar empleo a nuestros habitantes. En ese momento, contaban con el apoyo de Corpocesar, la entidad que les había otorgado las licencias iniciales de explotación y cuyos funcionarios actuaban de manera arbitraria en contra de nuestro pueblo. Sin embargo, en 2008, se les quitó esa autoridad y se le transfirió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Esta decisión fue solicitada por las mesas de trabajo y también llevó a que el director de Corpocesar instalara una oficina en La Jagua con trabajadores locales que, ya profesionales, merecían esta oportunidad.

Nuestro primer viaje a Bogotá tuvo lugar en 2009, después de la tercera visita del presidente en 2008, cuando vino a dar seguimiento a lo que se había acordado. Es probable que ningún otro presidente vuelva a visitar La Jagua tres veces en un año. Esto se debió al respaldo de toda la comunidad a la hazaña de detener la producción de carbón durante tres días.

A continuación, enumero los 25 logros de las mesas de trabajo para La Jagua. Estos logros marcaron el camino para que el municipio pudiera liberarse de la indiferencia, a pesar de que Glencore

nunca comprendió que la comunidad se defendió y sigue haciéndolo contra sus ataques a los ríos, la fauna, la flora, los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, así como la masacre laboral que llevó a cabo en 2020. Detallaré estos aspectos más adelante, pero antes quiero añadir que, aunque el Gobierno y la comunidad los obligaron a cumplir, continuaron burlando al pueblo en connivencia con las leyes colombianas y numerosos funcionarios corruptos que fueron sobornados por Prodeco para llevar a cabo una planificación minera deficiente.

1. Reubicación de la trituradora de carbón Las Cumbres: se logró mover la trituradora que causaba contaminación y molestias en la vía principal.
2. Declaración de La Jagua como área fuente de contaminación: este logro se mantuvo hasta el año 2009, resaltando la importancia de abordar la contaminación en la región.
3. Establecimiento de la EAIE: se logró una alianza entre empresas y comunidades para la reforestación de la cuenca media del río Tucuy.
4. Oficina de atención a comunidades para empleabilidad: se creó un lugar donde los residentes podían presentar sus hojas de vida para trabajar en las empresas locales.
5. Oficina permanente del Ministerio de Trabajo en La Jagua: esto garantizó un seguimiento más cercano y efectivo de los problemas laborales.
6. Establecimiento de la oficina de Corpocesar dirigida por residentes locales: esto permitió que las decisiones sobre el medio ambiente local se tomaran en el lugar de los hechos.
7. Gestión de 400 subsidios para construcción y mejora de viviendas por parte de la Gobernación del Cesar: esto ayudó a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de La Jagua.
8. Brigadas para obtener libretas militares: estas brigadas aseguraron que los residentes pudieran obtener los documentos necesarios para trabajar en las minas.

9. Cursos del SENA para operadores, mecánicos y técnicos: esto proporcionó formación técnica esencial para el empleo en la industria minera.
10. Dotación de aulas itinerantes al SENA por parte del Ministerio de Educación: se mejoraron las instalaciones educativas para la formación técnica.
11. Creación de la primera aula de capacitación de Gecolsa: esta empresa brindó oportunidades laborales directas a los habitantes locales.
12. Construcción de la avenida Paso Nacional: la contribución de regalías del municipio permitió la construcción de esta importante vía.
13. Construcción de la vía La Jagua-La Loma: aunque no se completó debido a problemas en La Loma, se logró un progreso significativo.
14. Construcción de la vía La Jagua-Rincón Hondo: a pesar del peaje, se logró la construcción de esta vía que benefició a la comunidad.
15. Visita al hospital por parte del ministro de Salud Diego Palacio: esto llevó a mejoras en las instalaciones de atención médica.
16. Estudio epidemiológico: aunque se solicitó y pagó, los resultados no han sido concluyentes, lo que representa una preocupación continua para la comunidad en términos de salud pública.
17. Consecución de un banco de maquinarias para el arreglo de vías rurales: si bien se cumplió parcialmente, se mejoraron las condiciones de las carreteras rurales.
18. Ingreso del municipio a Aguas del Cesar: aunque el objetivo era mejorar la calidad del agua, se ha cumplido solo parcialmente.
19. Se gestionó la construcción de una sala de terapia respiratoria en el hospital Jorge Issac Rincón Torres, la cual está en funcionamiento.
20. Proyecto ambiental en la cuenca media del río Tucuy, donde cinco empresas mineras crearon una bolsa para la protección de esta fuente hídrica.

21. Gestión del convenio de producción limpia aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente, donde todo el carbón que salía de la mina debería ser encarpado y las tractomulas debían salir lavadas para no contaminar el paso por el centro poblado.
22. A través de una acción de tutela interpuesta por Silvester Hernández, se logró la construcción de la berma de seguridad entre Becerril y Codazzi.
23. Se logró la adjudicación de 106 viviendas de interés social con aportes del municipio y fueron construidas por FONADE.
24. Se gestionó ante del Ministerio de Trabajo para que la mano de obra de los trabajadores de las minas fuera del 70 % de los cinco municipios del corredor minero.
25. Se logró la entrega de títulos de predios rurales en los corregimientos de la Victoria y La Palmita.

A medida que se lograban los avances en cada mesa, se emprendía una investigación sectorial sobre cómo brindar apoyo a los jóvenes, mujeres y profesionales de la comunidad. En un inicio, los sindicatos nos ignoraban, ya que buscaban nuestro respaldo principalmente para la detención de actividades en el contexto de sus acuerdos colectivos, y una vez logrados, dejaban de prestar atención a nuestras mesas de trabajo. Los temas que abordábamos eran de gran complejidad, incluyendo asuntos como Electricaribe, el acceso al agua potable y la salud de los trabajadores, la cual ya empezaba a deteriorarse.

Como miembros de las mesas de trabajo, éramos plenamente conscientes de que La Jagua de Ibirico se encontraba en una situación financiera extremadamente delicada. El alcalde compartió con nosotros su plan de desarrollo, pero nos informó de que carecía de recursos. La única solución era someter al municipio a la Ley 550, y el Gobierno le había pedido que implementara un plan de desempeño fiscal en paralelo. No obstante, esto requería el apoyo de las mesas de trabajo para sacar adelante al municipio.

Por otro lado, el alcalde, elegido con un discurso anticorrupción y que enfrentaba a la clase política del departamento, generaba cierto malestar en algunos políticos de la época y en algunas empresas

mineras. También, el gobernador de ese periodo había adquirido ciertos compromisos que resultaban difíciles de cumplir. Para armonizar estas relaciones, decidimos sostener conversaciones con el gobernador, aunque, lamentablemente, los resultados no fueron los esperados. No obstante, con la llegada de un nuevo gobernador, la situación se volvió un poco más favorable.

Dentro del pueblo, fuimos percibidos como una esperanza. Los compromisos acordados tenían el potencial de aliviar muchos de los problemas sociales que aquejaban a la comunidad. Cada vez que regresábamos de Bogotá, después de nuestras coordinaciones en las mesas de trabajo, traíamos buenas noticias. En medio de todo, nos dimos cuenta de que las comunidades dependían de nosotros para hacer realidad todos estos proyectos establecidos con el Gobierno. Surgía una esperanza de cambio palpable.

Recuerdo claramente nuestras reuniones en las que discutíamos por dónde debíamos comenzar. Fue entonces cuando planteamos una propuesta importante: poner fin al tránsito de tractocamiones por la vía nacional y buscar un medio de transporte alternativo para el carbón. Esta idea generó un considerable malestar en algunos sectores, especialmente entre los conductores y trabajadores relacionados con el lavado de carbón y la mecánica, ya que se temía que perdieran su sustento. Lo que más nos preocupaba era la existencia de mafias controladas por los dueños de estos tractocamiones. Se decía que un solo empresario tenía en su poder más de 300 de estos vehículos, y al eliminarlos de la vía nacional, se temía que su poder económico se viera amenazado. Sin embargo, la determinación del pueblo y de sus líderes superó estos obstáculos. Gradualmente, se acordó que el carbón se transportara por la vía La Loma hasta el tren, evitando así la contaminación de los pueblos, incluso Bosconia y partes del Magdalena, donde estas empresas mineras seguían causando estragos ambientales.

Por otro lado, el Gobierno nacional sometió al municipio al famoso «plan de desempleo» un termino de moda en esa época. A partir de finales de 2009, comenzaron a desembolsarse los

recursos de regalías que habían estado congelados. Además, el Concejo municipal, del cual yo era vicepresidente, acordó con el alcalde someter al municipio a la Ley 550. Sin embargo, la ejecución de esta ley tomó casi todo el periodo, y solo a finales de 2011 logramos alcanzar el objetivo de sanear las finanzas de La Jagua de Ibirico.

Es importante recordar que teníamos el apoyo de una funcionaria, Ana Leydis Vanstralhem, de la administración municipal. Ella, en su rol de secretaria de Gobierno, desempeñaba un papel crucial al respaldar nuestros viáticos para los seguimientos. Comenzamos a notar los cambios; las empresas empezaron a involucrarse más con la comunidad y no celebraban una sola reunión sin nuestra presencia. Cabe destacar que una de las reglas establecidas era que los miembros de las mesas debían hacer visitas periódicas a los complejos mineros. Cuando llegábamos allí, los representantes de las empresas nos mostraban cómo operaban. Sin embargo, a veces éramos algo ingenuos al creer completamente en lo que nos mostraban en esas ocasiones.

Viajar a Bogotá no era sencillo. Tomaba alrededor de 18 horas en autobús, lo que significaba pasar tres días en la capital. Algunos de nuestros compañeros se encontraban en una situación apretada en casa y no podían costear la comida de sus hijos. En ese entonces, Alba Amador llegaba a diario a mi casa, la cual ofrecí como oficina para su funcionamiento. Ella no recibía un salario regular, solo una compensación cada dos meses cuando íbamos a los viajes. Como coordinador general, tomaba un pequeño porcentaje de los fondos asignados a cada mesa y se lo entregaba a ella. Esto permitía que pudiera apoyarnos de manera voluntaria.

Alba Amador, en su rol de secretaria de las mesas de trabajo, nunca tenía los recursos necesarios para viajar con nosotros. El viaje a Bogotá no era sencillo. Nos alojábamos en hoteles cercanos a la Presidencia para evitar costos adicionales de taxis. Solíamos compartir taxis en grupos de cuatro para economizar. En la oficina de regiones, en el mejor de los casos, nos ofrecían una taza de café.

Pasábamos días con reuniones extensas, ya que los ministros debían dedicar tiempo a resolver cualquier incumplimiento durante el mes.

Trabajábamos sin un computador; todas las tareas se realizaban a mano. Al regresar a La Jagua, nos esperaba la ardua labor de transcribir todo lo acontecido en las reuniones para dejar constancia de nuestras acciones. Las jornadas eran largas, a menudo de siete u ocho horas de trabajo, y al final de cada día, nos esforzábamos en encontrar un lugar donde pudiéramos adquirir almuerzos económicos en Bogotá para que nuestros recursos rindieran.

El viaje de ida y vuelta nos llevaba unas 36 horas en total, llegábamos agotados. Empero, los meses pasaban rápido y los compromisos se estaban cumpliendo. Las oficinas de Corpocesar, el Ministerio de Trabajo y la Oficina de Empleabilidad de las empresas se establecieron. También comenzaron las construcciones en la vía Paso Nacional. Líderes de otros municipios comenzaron a buscarnos para solicitar apoyo sobre cómo podrían ingresar a trabajar en las empresas. Hubo un caso especial: líderes de La Loma, Cesar, vinieron a consultarnos sobre cómo podrían organizar una protesta social, porque estaban enfrentando situaciones similares. Con el tiempo, llevaron a cabo su propia protesta, pero no tuvimos conocimiento de sus resultados.

Poco a poco, las mesas de trabajo empezaron a ganar reconocimiento a nivel nacional y departamental. En nuestro municipio, el alcalde Alfonso Palacio Niño siempre mostró voluntad para apoyarnos, a pesar de que sabíamos que su gestión se beneficiaría al recibir los primeros recursos de regalías desembolsados gracias a nuestra labor como veeduría. Estos recursos serían utilizados en el desarrollo de su plan de desarrollo municipal.

Además, dentro de las mesas, seleccionamos a dos concejales que se comprometieron a trabajar codo a codo con nosotros. Esto contribuyó a dar credibilidad y respaldo a los compromisos pactados. Nuestra labor fue vital para que las obras empezaran a verse en la comunidad. A pesar de las diferencias técnicas que surgían debido a la falta de conocimiento en el campo, tanto el Gobierno como la

empresa minera enviaban expertos en diversos temas. En contraste, nosotros, como miembros de las mesas de trabajo, nos enfrentábamos a estos desafíos de manera empírica, siempre defendiendo los intereses de nuestro pueblo.

Es importante destacar que ningún miembro de las mesas estaba preocupado por obtener beneficios personales. De hecho, establecimos un reglamento interno que sigue vigente hasta hoy. De acuerdo con este reglamento, si algún miembro lograba conseguir empleo en las empresas mineras, debía dejar su puesto para permitir que otro asumiera la responsabilidad. En la actualidad, ninguna empresa puede afirmar que proporcionó apoyos o empleos a miembros. Nuestro enfoque estaba completamente centrado en asegurarnos de que el Gobierno cumpliera los compromisos adquiridos con la comunidad.

Con el paso de los meses, mientras viajábamos a Codazzi en una ocasión, uno de nuestros compañeros, Silvester Hernández, se percató de que la vía entre Becerril y Codazzi experimentaba numerosos accidentes. Descubrimos que la empresa que construyó la vía no había incluido una berma de seguridad. No sabemos exactamente cómo, pero se logró interponer una acción de tutela contra la empresa Córdor, que había sido responsable de la construcción de la vía. A los pocos meses, la acción de tutela se resolvió a nuestro favor y se inició la construcción de la berma. Es probable que muchos becerrileros desconozcan este logro de las mesas de trabajo de La Jagua.

En la administración municipal, se avanzó con la Ley 550, un proceso que duró tres años y comenzó a mostrar resultados tangibles. Asimismo, el gobernador Cristian Moreno Paneso continuó respaldando los compromisos de la mesa social.

Corpocesar instaló equipos de monitoreo de PM10, que tenían la responsabilidad de mantenernos informados sobre la calidad del aire que respirábamos. Pese a que estos informes se siguen entregando, nunca se emitió una evaluación a favor de las comunidades. Se tenía la percepción de que los funcionarios de la corporación estaban más inclinados hacia el apoyo a las multinacionales que a la protección del territorio.

Dado el gran número de compromisos acordados, se trabajaba incansablemente. Los líderes de las mesas de trabajo dedicaban tiempo todos los días para realizar seguimientos a todas las iniciativas. El Gobierno tenía sus delegados que nos contactaban semanalmente para obtener actualizaciones sobre el progreso de los compromisos.

En un momento, la mesa de compensación presentó una propuesta novedosa: sugería que las cinco empresas que explotaban el carbón crearan un fondo común y comenzaran un proyecto de reforestación en la cuenca media del río Tucuy. Esta idea llamó la atención del ministro de Medio Ambiente, quien la convirtió en una prioridad. Alix Aguas Sierra (q. e. p. d.), coordinadora de la mesa, tomó esta idea de Pedro Díaz, un ingeniero talentoso de las mesas, y la presentó durante una visita.

Este proyecto benefició a los campesinos de La Victoria de San Isidro, nuestro corregimiento situado en las faldas de la serranía del Perijá. Aparentemente, sin pretenderlo, las empresas se asociaron con ProSierra Nevada, una entidad de Santa Marta. Esta organización llevó a cabo el plan piloto de reforestación. Hoy en día, vemos cómo se ha establecido la Asociación de Técnicos Profesionales de La Victoria, un grupo de jóvenes campesinos que tuvo la visión de promocionar su producto estrella: el café.

Las mesas de trabajo solo tenían un interés primordial: impulsar el progreso de nuestro territorio.

En el ámbito de la mesa laboral, comenzamos a prestar atención a nuestros jóvenes, quienes tenían la capacidad de incorporarse en las empresas. El SENA inició la implementación de cursos técnicos, ya que había recibido simuladores de camiones para los aprendices, un logro que habíamos acordado en los compromisos.

También abordamos la cuestión de los bienes y servicios generados por las minas. Nuestro compañero Raúl Romero, que formaba parte de la mesa, buscó incansablemente oportunidades para que los comerciantes de La Jagua se involucraran en este negocio. Sin embargo, desconocíamos que existía una mafia dentro de estas multinacionales que acaparaba prácticamente todo, desde las principales

ciudades de la costa Caribe hasta el interior del país. A partir de este punto, nos dimos cuenta de que las minas no tenían una verdadera intención de colaborar con La Jagua.

En realidad, las comunidades, a través de la protesta social, desvelaron una realidad que, en el futuro, nos acarrearía aún más problemas: cuestiones sociales, ambientales, laborales, violaciones de derechos humanos y la pérdida de medios de subsistencia. Aun cuando continuábamos visitándolos con regularidad, las minas ya tenían su planificación minera en marcha, aunque resultó ser deficiente, como descubriríamos en los años venideros.

Capítulo 11. Las mesas sobreviven a la locomotora minera

Hacia el año 2010, las mesas estaban más organizadas y se cambiaba de coordinación anualmente para darle dinamismo a la entidad. Pasaron muchos compañeros que desempeñaron un trabajo excepcional, pero, lamentablemente, muchos jóvenes hoy desconocen los logros de 2007. Una de las razones es que no teníamos los recursos para difundir la información en los medios de comunicación ni existía WhatsApp ni habían tantos teléfonos inteligentes.

El país cambió de presidente, y con la llegada de Juan Manuel Santos, las mesas de trabajo se debilitaron. Este nuevo gobierno priorizó la locomotora minera y las modificaciones de las licencias ambientales, así como la unificación de las cinco empresas mineras propuestas por Prodeco para evadir impuestos. Argumentaron que se trataba de pequeña y mediana minería.

No hubo una socialización real de los problemas; más bien, las empresas y los funcionarios nos invitaban a firmar las planillas de asistencia en lugar de dialogar con nosotros. Estos seguimientos, a los que asistíamos ingenuamente, creyendo en el Gobierno y las empresas, nos salieron caros en el futuro. Con la llegada del tren a cargo de las multinacionales y la pavimentación de la vía entre La Jagua y La Loma, comenzó una avalancha para transportar el carbón en tiempo récord. En medio de nuestras preocupaciones por el cumplimiento de los acuerdos, dejamos de considerar el futuro de La Jagua.

Con el cambio de administración en 2011, empezamos a notar diferencias con los alcaldes. Aunque reconocían nuestra labor y nos brindaban ciertos recursos, como la oficina en la Casa de la Cultura, no era su prioridad que siguiéramos luchando para defendernos

de las empresas mineras. Un compañero señalaba que a los alcaldes no les gustaba ser vigilados, especialmente en 2012, cuando el municipio había liberado los recursos de regalías gracias a la Ley 550. Con una cantidad considerable de dinero en las cuentas, se decía que el municipio podría solucionar muchas de sus necesidades. Las empresas también afirmaban que había suficiente dinero para mejorar el pueblo.

Desde ese momento, dejamos de ser relevantes para los gobiernos. Pasamos a un segundo plano y nuestra última visita a Bogotá terminó de manera insatisfactoria, ya que intentaron poner fin a las mesas. Sin embargo, gracias a su reconocimiento por el Concejo municipal, todavía existen hoy en día. Además, en la última visita en el año 2011, recibimos un reconocimiento por parte del ministro Uriel Gallego de Transporte, quien declaró que éramos la mejor veeduría del país. A pesar de que esto no se hizo público en el pueblo, decidimos archivar la información sobre las mesas para evitar su desaparición definitiva.

Desde ese momento, se nombró una comisión para que hiciera un código de ética con un reglamento interno y se pensó en que debíamos ser relevados por gente nueva que entrara a apoyar para seguir con o sin Gobierno. Ese reglamento está vigente y fue aprobado por la mayoría de los miembros que relacionaré a continuación.

Tabla 1. Coordinadores y miembros de las mesas de trabajo

N.	NOMBRES	APELLIDOS	LÍDER	CARGO Y MESA
1	Adalberto	Muñoz Moreno	Vive	Coordinador Mesa Agua
2	Alba	Amador Orozco	Vive	Miembro Mesa Social
3	Alexander P.	Salazar Ávila	Vive	Coordinador Mesa Laboral-SENA

El despertar de La Jagua: el paro del 10 de febrero

N.	NOMBRES	APELLIDOS	LÍDER	CARGO Y MESA
4	Álvaro	Castro Meriño	Vive	Coordinador Mesa de Salud
5	Enides	Pérez Aguilar	Vive	Coordinador Mesa Social
6	Eusebio	García Guevara	Vive	Coordinador Mesa Ambiental
7	José Isabel	Gómez Maestre	Vive	Miembro Mesa Social
8	Luis Alfonso	Maestre	Vive	Miembro Mesa Laboral-SENA
9	Reinaldo	Peralta Restrepo	Vive	Coordinador Mesa de Agricultura
10	Ricardo	Castro Mesa	Vive	Miembro Mesa Laboral-SENA
11	Raúl	Romero Rodríguez	Vive	Miembro Mesa Laboral-SENA
12	Raúl Enrique	Calderón Socarrás	Vive	Miembro Mesa Social
13	Silvester	Hernández Rodríguez	Vive	Miembro Mesa Laboral-SENA
14	Henis	Serpa Moreno	Vive	Miembro Mesa Social
15	German	Albor Montero	q. e. p. d.	Miembro Laboral-SENA
16	Alix Victoria	Aguas Sierra	q. e. p. d.	Miembro Mesa Compensación

El despertar de La Jagua: el paro del 10 de febrero

N.	NOMBRES	APELLIDOS	LÍDER	CARGO Y MESA
17	Efraín	Arriaga Obregón	Vive	Miembro Mesa Compensación
18	Jairo Jair	Salazar Ávila	Vive	Coordinador Mesa Vías
19	Filia Luz	Salazar Ávila	Vive	Miembro Mesa de Salud
20	Yolanda	Rivera Pinkay	Vive	Miembro Mesa Salud
21	Jorge	López	Vive	Miembro Mesa Agricultura
22	Luis Antonio	Montaño Castellanos	Vive	Concejel creador del acuerdo municipal
23	Edilmer	Muñoz Bolívar	Vive	Miembro Mesa Laboral
24	Miguel	Rivero Camacho	q. e. p. d.	Coordinador Mesa Agua
25	Rubí del Carmen	Berrío	Vive	Miembro Mesa Social
26	Ana Mary	Peralta Restrepo	Vive	Miembro Mesa Salud

Figura 5. Miembros de las mesas de trabajo



Fuente: Fotografía tomada por el autor del libro en la mesa de trabajo, La Jagua de Ibirico, Cesar.

Es inspirador ver cómo más líderes se unieron a las mesas de trabajo a partir del año 2012, contribuyendo significativamente al esfuerzo colectivo. Félix Jiménez y Hernando Fonseca, entre otros, se destacaron por su arduo trabajo y compromiso continuo en las mesas. Algunos jóvenes ingresaron con la expectativa de empleo y se retiraron al darse cuenta de que las mesas no ofrecían remuneración, pero no fue así con aquellos que se quedaron y persistieron por el servicio desinteresado en la búsqueda del bienestar común.

Eusebio García asumió la coordinación de las mesas y enfrentó cinco años en los que el progreso se hizo más difícil. Los alcaldes mostraron poco interés en el trabajo de las mesas, pero Eusebio perseveró con el apoyo de Hernando Fonseca y Félix Jiménez, manteniendo el nombre y la misión de las mesas de La Jagua de Ibirico en alto.

Figura 6. Foto de líderes de las mesas de trabajo



De izquierda a derecha: Eusebio García Guevara, Félix Jiménez López y Hernando Fonseca Ríos. Fuente: fotografía tomada por el autor del libro en la mesa de trabajo, La Jagua de Ibirico, Cesar.

Estos años marcaron el inicio de una nueva etapa con desafíos adicionales. El gobierno de Juan Manuel Santos, con su énfasis en el desarrollo de la locomotora minera, planteó inquietudes en las comunidades del corredor minero. Esta estrategia buscaba acelerar la extracción y producción de carbón térmico, y las comunidades locales ya estaban resistiendo estos cambios. Sin embargo, los Gobiernos nacional y departamental no reconocieron ni apoyaron a las mesas de trabajo de la Jagua de Ibirico. La lucha por los derechos y la justicia en el sector minero se volvía aún más desafiante en este nuevo contexto político.

En el caso del Gobierno municipal, se asignó una oficina en la antigua Casa de la Cultura, que ahora alberga la Alcaldía municipal, para las mesas de trabajo. Sin embargo, Eusebio, quien estaba al frente de las mesas, entró en conflictos profundos con el alcalde. La mayoría de los líderes, necesitando buscar empleo para sustentar a sus familias, comenzaron a alejarse de la causa. Eusebio luchó durante cinco años, pero sin el apoyo institucional, las mesas no pudieron funcionar eficazmente.

A pesar de las dificultades, la pequeña oficina de las mesas atraía a organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, ya que el paro del 2007 había desencadenado investigaciones que revelarían importantes hechos en años posteriores. Además, los trabajadores sindicales, extrabajadores y jóvenes en busca de empleo se acercaban a las mesas. Eran un puente importante para que sus currículos fueran considerados.

Lideraba la entrega de invitaciones para las reuniones de mesa, pero había una disminución en la asistencia. A partir de 2016, tomé de nuevo la dirección para revitalizar la organización, pero enfrentamos la misma apatía; parecía que ya nadie nos quería.

Sin embargo, durante el proceso de entrega de la administración, Eusebio García me informó que algunas universidades, tanto a nivel nacional como internacional, estaban otorgando mayor importancia a las mesas. Mencionó a la Dra. Andrea Cardoso de la Unimagdalena, quien estaba desarrollando su tesis de doctorado. A su lado esta-

ba un joven antropólogo llamado Carlos Pardo, quien estaba realizando su tesis de pre-grado. Vinieron regularmente, cada mes o dos meses, mostrando un gran interés en conocernos. Su investigación prometía dar frutos si los líderes los apoyábamos.

Fue solo en 2018 cuando finalmente tuve la oportunidad de conocerlos, y aunque había mucho que contarles, fue desde entonces que comenzamos a trabajar en la visibilización de nuestro territorio. Ellos venían con regularidad, y aunque al principio me costaba un poco, los acompañaba en sus recorridos.

En ese momento, la mina Prodeco había logrado, con la complicidad de funcionarios corruptos del Gobierno, unificar las licencias ambientales de las cinco empresas que extraían carbón en nuestro pueblo: CMU, Carbones del Tesoro, Carbones del Caribe y CDJ. Esto se convirtió en el Proyecto La Jagua, con el único propósito de crear una sola licencia y, finalmente, sacar el carbón que estaba previsto para el año 2035 en menos de 10 años. Presentaron esta propuesta al Gobierno y sus ministros les otorgaron las licencias sin consultar a las comunidades. En realidad, venían al territorio a hacer «socialización» cuando las licencias ya estaban otorgadas. Tomaban nuestras firmas como si estuviéramos de acuerdo. Cuando me di cuenta de esto, junto con mis compañeros líderes, iniciamos una campaña para no firmar ningún acta más hasta que fuéramos escuchados.

Cuando hablamos de ser escuchados, nos referíamos a que queríamos saber qué estaban haciendo los señores de Prodeco por orden de Glencore, en connivencia con el Gobierno. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que los cinco títulos que poseía Glencore estaban divididos en varias empresas. La inversión social para el municipio de La Jagua llegó a ser de 1 millón de dólares. Sin embargo, el gerente de la mina La Jagua, Guillermo Salgado, redujo esta cantidad a 500.000 dólares, dividiendo los títulos de Glencore en varias empresas. La excusa de Guillermo Salgado fue que era necesario reducir ese monto porque el municipio ya recibía muchas regalías y eso era suficiente (por cierto, este señor se declaró persona no grata en el municipio y tuvo que ser expulsado de la mina).

Por orden del Gobierno, se unificaron las cinco empresas de Glencore en una sola empresa, dando como resultado el «Proyecto La Jagua» de Prodeco. Esta tenía una oficina ubicada en la esquina del parque de La Florida, donde todos los municipios del eje minero debían presentar sus hojas de vida y proyectos. Los presidentes de junta también llevaban sus propuestas, ya que la mina elaboraba anualmente su plan de inversión social para el mes de noviembre. Sin embargo, nunca vi que se aprobara un proyecto de un presidente de junta. A pesar de que recibían estas propuestas, ellos aprobaban proyectos presentados por personas y fundaciones de Barranquilla, que venían a lucrarse con nuestros recursos. Puedo afirmarlo con seguridad porque asistí a muchas capacitaciones de ellos como presidente de junta y miembro de las mesas de trabajo.

Lo que no sabía era que Prodeco debía haber iniciado su plan de cierre, desmantelamiento y abandono en 2016, según su plan de manejo ambiental (ver plan de manejo ambiental aprobado por ANLA). Hoy creo que fuimos demasiado ingenuos al creer en el gobierno de turno y en Prodeco, una empresa que llegó al territorio para acabar indiscriminadamente con nuestros pueblos.

A partir de 2016, comencé un proceso de investigación por mi cuenta para entender mejor las licencias y resoluciones que estaban afectando a La Jagua, Becerril, El Paso, Chiriguaná y Codazzi. Realicé una serie de visitas en busca de información de alcaldes, concejales, presidentes de juntas y líderes sociales en estos municipios. Nuestra idea era crear una mesa regional para defender nuestros territorios. Recuerdo que, junto a Edilmer Muñoz y Alex Salazar, quienes fueron los creadores de esta idea, fuimos por nuestros propios medios. A pesar de que las personas nos escuchaban, nadie nos apoyó en ese momento. Regresamos al pueblo muy desanimados. Incluso organizamos una rueda de prensa en la Gobernación del Cesar, enviamos una carta al gobernador y a los medios de comunicación. Pedro Díaz fue nuestro enlace, y nos dirigimos a Valledupar en una buseta con los ocho coordinadores para presentar nuestros resultados. Sorprendentemente, el gobernador de la época no se presentó para atendernos.

Los medios de comunicación, que ni siquiera merecen ser mencionados, nos preguntaron si había un desayuno o almuerzo para ellos a cambio de su asistencia, cuando ni siquiera teníamos suficiente para nosotros. Nos prestaron un micrófono y dimos nuestro informe, pero, para nuestra sorpresa, nadie asistió a escucharnos. De regreso, todos estábamos molestos y decidimos no seguir cometiendo errores. Desde ese día, muchos compañeros abandonaron las mesas de trabajo. Solo unos pocos, incluyéndome, seguimos en la veeduría.

Al comenzar mi investigación, intenté involucrar a varios líderes, incluso tomé la decisión de incluir a más personas en las mesas, especialmente jóvenes, para que lideraran este proceso. Sin embargo, muchos de ellos no veían ningún beneficio económico en participar y asistían una vez, pero luego no volvían.

Los jóvenes que venían a las mesas de trabajo a menudo se retiraban porque estaban más interesados en encontrar empleo en la mina. Cuando se daban cuenta de que las minas nos tenían vetados como líderes, simplemente se retiraban, ya que a los jóvenes de la época les interesaba más su empleo que defender su territorio.

El municipio comenzó a disfrutar de una gran cantidad de recursos y se iniciaron numerosas obras, como escuelas, nuevos barrios, infraestructura para el sector rural, suministro de electricidad a las veredas, viviendas, parques y muchos otros proyectos. Sin embargo, los alcaldes nunca pensaron que poner todos los huevos en una sola canasta sería un riesgo. Mientras tanto, las empresas mineras, como el comején, seguían aprovechando la situación. Solo llevaban a los concejales y a líderes a la mina en visitas en las que paraban la producción por un par de horas y regaban las vías de acceso a los *pits* mineros. Los empleados ayudaban a que, cuando llegaran las comunidades, todo pareciera estar bien.

Estábamos ciegos y sin apoyo del Estado. Un día normal en el municipio significaba ver muchos buses y busetas, así como hombres con uniformes de varias contratistas, ya que la mina tercerizó la contratación del personal a través de más de doscientas bolsas de empleo. Esta fue la forma más fácil para ellos de deshacerse de la so-

licitud constante de empleo de las comunidades. Esas bolsas de empleo dieron trabajo a personas provenientes de todas partes del país, quienes, con la complacencia de muchos, invadieron el territorio; solo unos pocos de La Jagua consiguieron vincularse laboralmente. En realidad, en el municipio, solo dejaban el arrendamiento de las habitaciones, el lavado de ropa y la venta de comida en la avenida Diagonal 1. Finalmente, solo el 30 % de los empleados eran de La Jagua y Becerril; el 70 % restante venía de todas partes del país.

Nos dimos cuenta tarde de esta situación. La fuente de esta información es personal, ya que me tomé la tarea de recorrer los barrios calle por calle. Vi con mis propios ojos las 2.500 habitaciones que se ofrecían como alojamiento. Como la mayoría de la población que trabaja en las minas proviene de diferentes partes del país, los pueblos mineros a menudo terminan en la ruina.

En este proceso de investigación, me dediqué a conocer más sobre cómo mi país creó leyes perjudiciales que mencioné en páginas anteriores. El objetivo era comprender cómo terminaría toda esta situación. Pasé casi todo mi tiempo entrevistando a los miembros de las mesas de trabajo, a las comunidades, a las asociaciones, a los presidentes de junta, a los sindicatos, y todos llegamos a la misma conclusión: las multinacionales fueron y siguen siendo protegidas por los gobiernos bajo la excusa de la inversión extranjera, sin importarles la vida humana, el medio ambiente o el agua de nuestros ríos, que se desviaron por orden de los gobiernos anteriores sin considerar las consecuencias.

Un hecho significativo es que los sindicatos en el municipio de La Jagua también estaban descontentos con sus acuerdos de los pactos colectivos con las empresas mineras. Por ejemplo, en el año 2012 los sindicatos llevaron a cabo un paro que duró más de dos meses en la entrada de la mina de La Jagua. Este paro concluye con unos acuerdos de pactos colectivos. Al negociar estos acuerdos, dejaron de lado las necesidades de las comunidades. Para las mesas de trabajo, esto era contradictorio. Sin embargo, cuando empezaron a cerrar las minas de Prodeco, los sindicatos se dieron cuenta de que necesitaban

el apoyo de las comunidades. Buscaron a las mesas de trabajo y los estamos respaldando. Hoy, con los despidos masivos realizados por Prodeco, estamos unidos en la defensa de nuestros territorios. Esto ha permitido que los pocos trabajadores de La Jagua que quedaron busquen una reconversión laboral justa para ellos y sus familias.

Capítulo 12. La burbuja de riqueza de la minería de carbón y sus consecuencias

A partir de 2013, nuestra comunidad vivía en una especie de paraíso. El municipio gozaba de una economía estable con alcaldes que disponían de abundantes recursos para invertir en una gran cantidad de proyectos que estaban en línea con los planes de desarrollo aprobados. La tasa de empleo era elevada. El comercio florecía, parecía que estábamos en la cúspide de la prosperidad. Los ingresos fiscales eran extraordinariamente altos, lo que nos llevó a ascender rápidamente a la cuarta categoría como municipio.

Sin embargo, en medio de este aparente bienestar, nadie estaba considerando el futuro socioeconómico de La Jagua. El municipio se expandía a un ritmo vertiginoso y nuestra población superó los 40.000 habitantes, con más del 51 % de la población siendo flotante. Era común escuchar la expresión «La Jagua de Ibirico, la tierra que fluye leche y miel».

La empresa Prodeco continuaba con su estrategia de hacer creer a la comunidad que mantenía buenas relaciones con todos. Pero bajo tierra, por así decirlo, estaban tejiendo una red de engaño que, años más tarde, daría frutos a sus planes cuidadosamente elaborados.

Los trabajadores fijos y aquellos de las bolsas de empleo disfrutaban de salarios sustanciosos. En realidad, a cualquier trabajador de la mina, sin importar su posición, le sobraba dinero con las generosas quincenas que recibían. Este bienestar se manifestaba de diversas maneras. Las esposas de los mineros, que antes llevaban vidas modestas, ahora se permitían viajar a ciudades como Codazzi o Valledupar para hacer sus compras. Los salones de belleza siempre estaban llenos, y los precios de los productos básicos se disparaban.

Nuestra pequeña comunidad en La Jagua se había convertido en uno de los lugares más caros de la costa caribeña, y la gente, en su mayoría, aceptaba este aumento de precios sin cuestionar.

La siguiente canción fue insignia de la época de las vacas gordas de la minería del carbón en La Jagua.

El Drumero

Compositor: Profesor Álvaro Bolaño

Ya mi negra, ya mi negra me dejó,
porque lo que yo gano no me alcanza para mucho.

Ella dice que quiere un hombre mejor,
que trabaje en la Drummond y le dé todos los gustos (bis).

Cuando le echaba el cuento le dije a mi amada,
la máquina que opero ha sido mi redención,
y eso la alegró tanto que eso la pensaba,
ya me llegó el drumero de mi salvación.

Yo ya le hice esta broma pa' ver qué pensaba,
porque es una estrategia que yo siempre he usado.

Y ella creyó que era una máquina pesada,
y era mi carretilla de vender pescao.

Yo no sé qué es lo que pasa con las hembras de La Jagua,
que, si tú no eres drumero, ya no te quieren ni ver.

Yo me voy a hacer un curso de maquinaria pesada,
o si no a mi carretilla orugas le pondré.

(Coro)

A poner, a poner orugas, le voy a poner,
para ver si buldociando me consigo otra mujer.

A poner, a poner, orugas le voy a poner,

y trabajo siete por cuatro y a veces siete por tres.

A poner, a poner, orugas le voy a poner,
y en los cuatro me emborracho y ella goza de placer.

Yo conozco un drumero muy especial,
que, antes de entrar a la empresa, era sencillo y muy decente.

Pero apenas que plata empezó a ganar,
se volvió un engreído y desconoce hasta su gente (bis).

No toma Medellín porque eso es lava gallo,
ya no toma aguardiente porque es petróleo.

Pero yo sé bien que cuando estaba varado,
vivía harto de chirrinchi del que trae Mindolo.
A mi hembra le gusta el hombre que le gaste plata,

en whisky, ropa fina y mucha diversión.

Yo no gasto ni las suelas de mi par de abarcas,
pues son originales de llanta de tractor.

Mi negra me exige viajes, pulseras y zapatos finos,
pero es que los pescaítos no me alcanzan para ná.

Yo le dije: si es así, busca alguien que te camine,
que drumero paganini aquí en las jaguas es lo que hay.

(Coro)

Aquí hay, aquí hay, paganinis aquí hay,
que tienen cuatro mujeres cada una con su caimán.

Aquí hay, aquí hay, paganinis aquí hay,
que regalan la quincena y después no hallan dónde fiar.

Aquí hay, aquí hay, paganinis aquí hay,
y la pobre de la casa que coma yuca con sal.

Mi esperanza era el curso que yo iba a hacer,
pero pa' entrar al SENA, de un aval se necesita.

Resulta que el concejal que yo apoyé,
cayó fue en un trasmallo cerca de Bocas de Cenizas (bis).

Nadie se escapa ya de la drumomanía,
que muchos se olvidaron de su profesión.

Profesores, abogados y hasta policías
sueñan con la fantasía de operar un camión.

Yo tendré que resignarme con mi carretilla,
vendiendo a veces fresco y otras veces salado.

Y a la espera de una dama que al fin se le mida,
a disfrutar conmigo el tufo del pescao.

Si no me llega la dama que quiera vivir conmigo,
no lo pensaré dos veces, ya sé lo que voy a hacer,
me convierto en el caimán de un drumero parrandero
y mientras él toma trago, yo le cuido a su mujer.

(Coro)

La mujer, la mujer, esa que vive con él,
pero que la desatiende por buscarse otro querer.

La mujer, la mujer, esa que sufrió con él,
cuándo no había trabajo que no había ni pa' comer.

La mujer, la mujer, esa que vive con él,
pero que ahora se rebusca para que él chupe también.

La mujer, la mujer, esa que vive con él,
que aburrida de tanta vaina se dispuso a serle infiel.

La mujer, la mujer, esa que vive con él,
que mantiene al caimancito, pero con el sueldo de él.

La empresa minera llevaba a cabo actividades en el municipio,
pero nadie realmente prestaba atención a ellas. Los representantes de
la mina llegaban en sus camionetas y se reunían con los presidentes de

juntas de acción comunal para llevarse sus proyectos, que a menudo eran rechazados. Vivíamos con las vendas en los ojos, como caballos de hípica, sin cuestionar las acciones de la empresa.

Al mismo tiempo, los estruendos de las explosiones eran una parte cotidiana de nuestras vidas. Aproximadamente al mediodía, sentíamos fuertes sacudidas que hacían temblar las casas en barrios como El Paraíso, Galán, 17 de Febrero e incluso dentro del casco urbano. Las calles se cubrían de polvo negro, los techos de las casas se ennegrecían, los autos quedaban manchados de negro cuando les pasabas la mano por la pintura, y las hojas de los árboles se volvían oscuras. Cuando la mina detonaba explosivos, se creaba una nube de polvo suspendida en el aire que se asentaba sobre nuestro municipio, cubriéndonos a todos.

Mi trabajo en el hospital me permitía ser testigo de la cruda realidad que vivíamos a diario. Los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa estaban desbordados de pacientes enfermos. Los equipos de nebulización no daban abasto. Fue entonces que decidimos solicitar el perfil epidemiológico a la Secretaría de Salud. Cuando finalmente lo obtuvimos, los datos estadísticos sobre Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) eran impactantes. Parecía que nadie se preocupaba por nuestra salud. Estábamos atrapados en una nube de polvo a diario mientras la mina extraía carbón sin piedad.

Ver a tantos hombres llegar a los servicios médicos, todos apretujados, era desgarrador. Pero lo más triste de todo eran los niños y sus madres. La mitad del pueblo estaba enfermo, y desde las mesas de trabajo habíamos solicitado un estudio epidemiológico para comprender la verdadera situación de nuestra salud. Habíamos propuesto que este estudio se llevara a cabo en todos los municipios del eje minero, como estaba acordado en los compromisos del paro que habíamos realizado.

La Secretaría de Salud departamental se hizo cargo de este compromiso y buscó a la Universidad Nacional para realizar el estudio. Sin embargo, la ejecución fue deficiente. Realizaron un muestreo aleatorio en grupos de población, excluyendo a los adultos mayores y a los

niños. Nos indignamos y protestamos enérgicamente, pues parecía que alguien no quería que se llevara a cabo un estudio completo y preciso. Este compromiso estaba claramente establecido en la matriz de acuerdos con el gobierno Uribe, pero pasaron muchos años y ninguno de los secretarios de Salud municipales nos prestaron atención.

En la mesa de salud, contábamos con la participación activa de Filia Salazar y la doctora Yolanda Rivera. En uno de sus viajes a Bogotá, visitaron el Hospital de Kennedy y regresaron con la idea de construir una sala de terapia respiratoria en nuestro hospital. Esta iniciativa comenzó con buen pie, pero pronto nos dimos cuenta de que no era suficiente. En el pueblo, había personas que necesitaban oxígeno de manera permanente, como William Orozco, quien estaba confinado en su cama debido a múltiples patologías. Además, muchas personas se vieron obligadas a abandonar el pueblo debido a infecciones en la piel diagnosticadas por dermatólogos, causadas por el polvillo del carbón.

Tuve acceso a varios resultados de los perfiles epidemiológicos del municipio. Fue escalofriante ver la incidencia de IRA en comparación con otros lugares. Pese a los informes, la mina y las autoridades de salud simplemente decían que «eso se da porque cocinan con leña». Imaginen ustedes, estimados lectores, la gravedad de esta respuesta.

Decidimos investigar más a fondo con las EPS, pero a menudo se nos negaba la información. Aun así, averiguamos que más de 18.000 habitantes de La Jagua tenían indicios de una enfermedad respiratoria. Esto se reflejaba en los perfiles epidemiológicos de los años 2010 al 2015, que mostraron los picos más altos de estas patologías. Esto solo incluía los datos del Hospital de La Jagua; faltaban los informes de las EPS del régimen contributivo, a los cuales estaban afiliados los trabajadores mineros. Sin embargo, estas EPS rara vez proporcionaban informes a la Secretaría de Salud municipal.

El tema era sumamente complejo. Las mesas de trabajo continuaban presionando para que se llevara a cabo el estudio epidemiológico. Expertos neumólogos nos habían informado que, según un tamizaje realizado en La Jagua, la mina estaba contaminando no

solo los pulmones de los habitantes, sino también su piel y vista. Sin embargo, nos indicaron que debíamos demostrarlo técnicamente. Si lográbamos probar esto, las minas deberían cerrarse. Fue por esta afirmación que las empresas, sin excepción, buscaron frenar el estudio. Más adelante, les contaré cómo logramos que se llevara a cabo.

Por otro lado, las casas rajadas eran un tema de preocupación que no podíamos pasar por alto. Un grupo de miembros de las mesas, junto con líderes y algunos concejales, efectuó un control político en el Concejo municipal sobre este asunto. El debate duró toda una tarde y durante el mismo se mostraron fotos y videos de las viviendas dañadas. Incluso los dueños de las viviendas afectadas estuvieron presentes.

La respuesta de la empresa Prodeco a esta situación fue desconcertante. Argumentaron que tenían equipos para detectar las vibraciones de sus explosiones y que no superaban las normas establecidas. Cuando se les preguntó sobre cuál era exactamente esa norma, respondieron que «eso deberían preguntárselo al Ministerio de Minas, ya que en Colombia no existe legislación para este tipo de situaciones». También se cuestionó quién regulaba estas normas, y su respuesta nos dejó desanimados. Argumentaron que en Colombia aplicaban una norma alemana destinada a países que no tenían legislación propia y Prodeco se acogía a esa norma. La reunión terminó en ese punto. Solicitamos al Concejo municipal que notificara al alcalde para que el municipio asumiera la responsabilidad de llevar a cabo un estudio independiente y así poder determinar el responsable de esta situación.

Para sorpresa de todos, el estudio se realizó en 2021 por la Fundación Universitaria del Área Andina en Valledupar y arrojó resultados a favor de la mina y en detrimento de las comunidades (los resultados los puede encontrar en el Informe de Auditoría de Cumplimiento al proceso de licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar, 2018). De manera similar, no puedo pasar por alto el estudio epidemiológico realizado por la Universidad Javeriana de Bogotá, que resultó pagado por las empresas mineras, lo cual es inaudito. La administración municipal de esa época no tomó ninguna medida al respecto y permitió que la

mina ocultara los resultados durante más de tres meses. Solo bajo nuestra presión se revelaron, y el resultado fue en favor de la mina, afirmando que las partículas de carbón no eran la causa de las enfermedades en los habitantes de la región (los resultados están disponibles en la Secretaría de Salud municipal).

Esta situación es muy decepcionante para las comunidades, ya que la academia, en este caso la Universidad Javeriana, parece haber sido influenciada de alguna manera por la multinacional Glencore o, al menos, por algunos de sus funcionarios.

Los lectores pueden preguntarse dónde estaban las veedurías del proyecto en este proceso. Visitamos el hospital de La Jagua, donde se llevaron a cabo varias actividades relacionadas con estos estudios, pero no pudimos obtener acceso a las personas que emitieron los resultados. Esto fue un fracaso para las comunidades y una victoria para la corrupción de estas empresas en Colombia. Ojalá en el futuro la academia pueda intervenir y que los líderes locales financien estudios imparciales para conocer la verdad sobre si la explotación de carbón a cielo abierto está afectando la salud de nuestros conciudadanos.

Por último, es lamentable escuchar que Cemprende, una entidad que se creó para fortalecer a los campesinos y emprendedores en el área de influencia de la mina, resultó ser un fracaso. El hecho de que el 60 % de los recursos se destinara a los profesionales y solo el 40 % llegara a las comunidades es una evidente mala gestión de los fondos y un claro desvío de los recursos que deberían haber beneficiado a las personas locales. Sin duda, una auditoría interna podría arrojar luz sobre estas cuestiones y, espero, garantizaría una mayor transparencia y eficacia en el uso de estos recursos. El Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías (CESIR), en teoría, debería hacer un seguimiento imparcial a las regalías del carbón. Sin embargo, al ser financiada por las empresas mineras, se crea un conflicto de intereses que dificulta la objetividad en su labor. Es fundamental que las instituciones encargadas de supervisar y regular estas actividades económicas lo hagan de manera justa y sin influencia de los actores económicos involucrados.

Capítulo 13. Consecuencias de la minería de carbón en el entorno rural

Es desgarrador escuchar cómo la actividad minera, en este caso, la explotación de gas de yacimientos no convencionales, ha afectado a La Palmita, un corregimiento de La Jagua, con una población de alrededor de tres mil habitantes.

La falta de empleo para los residentes locales es un problema significativo. La empresa PLJ lo justifica diciendo que La Palmita no está dentro del área de influencia de la mina, pero esa es una excusa inaceptable. Además, la problemática con Drummond y la ampliación de la licencia ambiental que ha afectado a la vereda Mechoacán agrava la situación. Las irregularidades en las negociaciones y la falta de consulta previa en estas circunstancias son preocupantes.

La situación empeora al considerar que la empresa de explotación de carbón, el Proyecto El Corozo, no ha contratado personal del corregimiento, lo que ha llevado a una pérdida de medios de subsistencia tradicionales como la pesca, la caza y la agricultura. También es alarmante la actitud de los vigilantes, que incluso recurren a la violencia para evitar que los habitantes locales obtengan comida de los recursos naturales que quedan. La falta de consideración por la fauna local y el desperdicio de recursos forestales son una clara demostración de cómo estas empresas no están respetando ni beneficiando a las comunidades afectadas.

La Palmita es un ejemplo doloroso de cómo la explotación minera puede afectar adversamente la vida de las personas en las comunidades cercanas, además de ilustrar la falta de regulación efectiva y de responsabilidad por parte de las empresas mineras y las autoridades pertinentes.

Es evidente que la mina intenta utilizar prácticas engañosas para mostrar un falso apoyo de la comunidad en La Palmita. El hecho de que busquen que las personas firmen planillas de asistencia para utilizarlas como respaldo en la aprobación de proyectos es una práctica cuestionable y poco ética. Sin embargo, las comunidades de La Palmita están resistiendo estas prácticas y no están dispuestas a ser manipuladas por la empresa minera, pues están preocupadas por el impacto que la actividad minera tiene en sus vidas y su entorno. Esta resistencia es fundamental para defender los derechos y el bienestar de estas comunidades.

A lo anterior se suma la falta de información en cuanto a la explotación de estos recursos. La protección de la vida y del entorno debe ser una prioridad, y es fundamental que el Gobierno y las empresas privadas actúen de manera responsable y ética.

La historia de La Palmita y su resistencia a lo largo de los años es un recordatorio de la importancia de luchar por los derechos y la calidad de vida de las comunidades en medio de actividades industriales. La búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades es un desafío importante que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad.

Otro lugar afectado por la actividad minera es La Victoria de San Isidro, un lugar hermoso, con gente trabajadora y honesta que ha dedicado sus vidas a la labor del campo y ha sido una fuente importante de productos agrícolas para la región. Sin embargo, parece que la presencia de la mina de Prodeco ha encerrado a estas comunidades al punto de que, para llegar a La Victoria, deben atravesar los límites del municipio de Becerril.

La historia se remonta años atrás. Recuerdo que se llegaba al corregimiento por una carretera rural. Era una vía estrecha que cruzaba pequeños riachuelos, incluso pasábamos por un lado del río Tucuy antes de llegar. Con la compra de la mina por parte de Glencore, sin que las comunidades se percataran, se inició el cierre de esta vía rural. Algunos años después, se perdió la vía y no ha habido quien responda por ella.

Tiempo después, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía municipal, al no haber una vía de acceso a La Victoria, la construyó. Durante años, el municipio ha sido responsable del mantenimiento y pavimentación de la vía que conecta La Jagua con La Victoria. En este proceso, la mina ha utilizado estos tramos para depositar material estéril, lo que hoy día es evidente a lo largo del recorrido hacia el corregimiento.

La visita a La Victoria, tanto para los locales como para los forasteros, es testimonio de la asombrosa resiliencia de sus habitantes. La mina privatizó la vía e instaló carteles que prohibían a los residentes pescar, transitar e incluso estar en su propio territorio. Recuerdo con claridad un incidente ocurrido en 2008. En ese momento, el alcalde y los concejales se dieron cuenta de la situación y propusieron construir una vía que fuera propiedad del municipio. Plantearon la idea a los campesinos y líderes sociales para construir la carretera a través de la bocATOMA y erigir un puente sobre el río Sororia, cerca de la finca de los Cuadro, una familia propietaria de esas tierras.

No obstante, el gerente de la mina en ese entonces abusó de su poder. Al darse cuenta de que esta vía a través del municipio afectaría sus botaderos, se trasladó al corregimiento. Allí ofreció a los ciudadanos la posibilidad de realizar una consulta para que la vía continuara por su ruta actual. Sin embargo, esto fue un engaño. Hizo promesas falsas, incluyendo la oferta de empleo para los hijos de los campesinos, y ejecutó el ejercicio de consulta ciudadana, que en realidad fue una manipulación por parte de Prodeco. La compañía cubrió todos los gastos, prometió empleos que nunca se materializaron y despidió a los trabajadores que había engañado previamente. El verdadero propósito detrás de este acto era ocultar la desaparición de la vereda La Nueva Victoria y expandir los botaderos de material estéril en el corregimiento.

Al ascender a la vereda Las Delicias, los campesinos expresan que, desde hace más de dos años, sus cultivos de aguacate, café y otros productos agrícolas ya no están cubiertos de polvo de carbón. Esto ha sido el resultado del cierre de la mina. También mencionaron que, durante

la fase de explotación, las luces de los equipos mineros penetraban en sus viviendas durante la noche, lo que hacía que fuera prácticamente imposible conciliar el sueño debido al ruido constante.

Nuestra investigación reveló que, al consolidar los cinco títulos mineros en una sola licencia ambiental, Prodeco hizo una mala planeación minera y se vio obligada a enterrar más de 11 millones de toneladas de carbón en la parte norte del *pit* minero. Esto, en última instancia, habría afectado el río Sororia y el acueducto que suministra agua al municipio de La Jagua. Dicho carbón fue cubierto con millones de toneladas de material estéril en la misma área.

Es importante señalar que la fuente de esta información debería ser la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), ya que en 2010 otorgó los permisos y las licencias para la consolidación de estos títulos. En ese proceso, la mina buscó evadir el pago de impuestos reales al declararse como una pequeña y mediana empresa durante los 30 años que operó en la región, a pesar de realizar minería a gran escala.

En la actualidad, La Victoria y sus habitantes han llegado a la conclusión de que no desean que la mina se reabra. De hecho, no les interesa en absoluto. Su enfoque se ha desviado hacia la agricultura y el turismo, lo que les ha permitido vivir sin depender de la minería. Además, la comunidad se ha dado cuenta de que solo un pequeño porcentaje de trabajadores, no más del 30 %, se beneficiaron de la mina.

En la actualidad, disfrutan de una variedad de cultivos, como café, maíz, maracuyá y tomate de árbol. También se dedican a la apicultura y han desarrollado su propia marca de café. Si un lector se acerca al corregimiento de La Victoria de San Isidro, en el municipio de La Jagua de Ibirico, y pregunta a los campesinos y a los residentes del casco urbano si desean que la mina se reabra, su respuesta será un firme «no nos interesa».

Figura 7. Boquerón antes de iniciar la explotación minera



En esos años, era un pueblo humilde, pero se vivía feliz sin minería.
Fuente: anónimo.

Figura 8. Boquerón en 2010, antes de la primera resolución



Fuente: anónimo.

Sobre el corregimiento de Boquerón, que está ubicado en la vía La Loma, cuentan que era un caserío muy pequeño, donde residían cinco familias que empezaron a vivir allí después de la guerra de los Mil Días. Se vivía de la pesca, la agricultura y la ganadería. Mi historia se remonta a los años sesenta, cuando mi padre, Teófilo Castro Torres, pasó por Boquerón. En ese entonces, venía de El Paso junto a mi tío Juan Castro, su esposa Bertina Padilla y sus hijos mayores. Según relata mi tío Juan, se establecieron allí gracias al terreno que el señor Casimiro Mesa les otorgó para vivir. Luego, se mudaron a la finca Pachito, que hoy es una vereda. Finalmente, se asentaron en la vereda Caño Adentro, donde creció la familia. Desde entonces, nunca dejaron La Jagua de Ibirico. Es importante mencionar esta historia para que los jagüeros conozcan de dónde proviene Álvaro Castro Meriño.

Boquerón era un lugar alegre y próspero en la década de 1980. En aquel entonces, trabajaba en la finca Rosa Isabel, que se destacaba por el cultivo de extensas áreas de arroz. Mi primo Juan Castro, uno de los hijos mayores de mi tío Juan, me consiguió trabajo como bodeguero. Además, vendía boletas de rifas en La Jagua. En ese momento, mi empleador se trasladó a Astrea, Cesar, pero mi tío me alentó a quedarme. Como adolescente huérfano, su apoyo y el de mis primos, los hijos de mi tío Juan, fueron cruciales. Les debo un reconocimiento profundo, ya que, de no haber sido por ellos, mis casi cuarenta años de historia en La Jagua habrían tenido un rumbo muy distinto.

Sin embargo, para 1995, la llegada de las empresas mineras ya estaba en boca de todos. Aunque los moradores de Boquerón desconocían lo que el futuro les deparaba, todos soñaban con un porvenir mejor para las 106 familias que entonces habitaban el pueblo. Estas eran familias humildes que lo tenían todo a su alcance, y la llegada de las multinacionales, que habían estado explotando y saqueando territorios durante décadas, se percibía como un cambio que podría mejorar sus vidas.

En 2006, empecé a visitar Boquerón con más regularidad, llevando una propuesta política: ser elegido concejal para defender nuestro territorio. La idea caló hondo y resulté elegido con la votación más alta en la historia del corregimiento, después de Adel Lima. Esto me llevó a un nuevo nivel.

Luego del paro de 2007, algunos líderes de Boquerón como Rudy, Luis Tomás y su esposa acudieron a mí para que les ayudáramos a que sus voces fueran escuchadas, ya que habían denunciado que el corregimiento sufría por múltiples problemas, pero eran ignorados por el Gobierno a nivel nacional, departamental y municipal. No tenían acceso a agua potable. No tenían un colegio propio ni un centro de salud digno, a pesar de estar tan cerca de La Jagua. El médico venía a atender a la comunidad mensualmente. La carretera entre La Jagua y Boquerón era un peligro constante, ya que pasaban tractomulas cargadas de carbón, pero la vía estaba sin pavimentar. Los niños estudiaban en La Jagua, pero no tenían transporte escolar. Pedían «chance» a los conductores y se aferraban a los vehículos para llegar al colegio Luis Carlos Galán, en La Jagua. Los demás niños y niñas caminaban largas distancias a pie para asistir a clases. Además, la falta de pavimentación en la carretera permitía que las grandes máquinas que transportaban carbón levantaran nubes de polvo, contaminando todo a su paso.

Lo más desolador era la carencia de agua potable en el corregimiento. Las familias debían caminar casi un kilómetro o utilizar burros para traer agua para sus necesidades diarias.

En los acuerdos de las mesas de trabajo con el presidente, se había establecido que la mina debía regar diariamente la vía para reducir la cantidad de polvo. Las multinacionales contrataron a una empresa llamada Sánchez Polo, que usaba camiones cisterna para regar la vía durante todo el día. Aunque esto mejoró la calidad del aire, era absurdo, ya que el agua utilizada para regar provenía del caño Pajuil. Las mujeres solían lavar la ropa en ese caño y, más importante aún, lo usaban para consumo personal. La empresa les prohibió lavar y extraer agua de su propia fuente, a pesar de que los habitantes

de Boquerón habían construido ese caño con pico y pala hace más de 40 años. Aquí comenzó una violación flagrante de los derechos humanos del corregimiento.

Organizamos una fuerte protesta junto con la presidenta de la junta de acción comunal, forzando a Corpocesar, que había otorgado de manera maquiavélica una licencia de captación de agua para regar la vía, a revertir su decisión a finales de 2009. La resistencia de la comunidad logró recuperar el control del agua del caño Pajuil.

Este hecho obligó a las autoridades a prestar más atención a Boquerón. El alcalde de la época presentó un plan de desarrollo que incluía la construcción de una escuela primaria y secundaria, un centro de salud y un sistema de acueducto. Las obras comenzaron a fines de 2009 y todo parecía marchar según lo planeado. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente cometió un grave error que afectó a Boquerón durante más de 13 años al retirarle a Corpocesar la facultad de emitir licencias. Emitió la Resolución 0970, modificada posteriormente por la 1525, que declaró a Boquerón y Plan Bonito como sujetos de reasentamiento.

En un principio, esto no pareció ser tan grave, pero cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Las comunidades nunca fueron consultadas sobre esta decisión. Sin entrar en todos los detalles, lo que puedo afirmar es que, a partir de ese momento, Boquerón se vio sometido a la pérdida de sus medios de subsistencia. Una parte de la resolución afirmaba que Boquerón debía ser trasladado debido a que se había declarado área fuente de contaminación. Allí sí perdimos todo. Actualmente, los gobiernos han sido indolentes con unas familias que se resisten a salir de Boquerón.

Se desató una oleada de migrantes que llegaron al pueblo con la intención de comprar tierras porque se les iba a indemnizar. En poco tiempo, el corregimiento se llenó de personas que no estaban bajo control de la comunidad. Hoy en día, hay más de 1.000 familias que buscaban ser indemnizadas. Aquí hay una responsabilidad compartida entre los líderes que permitieron que el corregimiento llegara al punto de sufrimiento en el que se encuentra y las empresas

que desde el principio dilataron el proceso, tratando de evitar cumplir con su mal llamada inversión social empresarial.

Para que un boqueronero pudiera conseguir empleo en las minas, debía realizar protestas y bloqueos de la vía. Pasaron 13 largos años, durante los cuales varias entidades a nivel nacional e internacional comenzaron a centrar su atención en el corregimiento. Incluso hubo ONG que, a través de la supuesta «investigación», lograron captar recursos a nivel internacional, pero, al final, sus esfuerzos resultaron insuficientes. Pareciera que el pueblo fue víctima de múltiples abusos de parte de todo el mundo.

Mientras tanto, la locomotora minera de Juan Manuel Santos, implementada por su gobierno en favor de las empresas, duplicaba la extracción del mineral. Los botaderos se ubicaron casi al pie de las casas, y el cementerio quedó dentro de la zona de explotación, lo que hacía que los habitantes tuvieran dificultades para visitar a sus seres queridos fallecidos.

Figura 9. Vista periférica de Boquerón



Fuente: anónimo.

Estas resoluciones, impuestas sin consultar a las comunidades, dejaron a todos los alcaldes sin capacidad de invertir en Boquerón, ya que se suponía que el corregimiento sería trasladado. Con el tiempo, es evidente que estas medidas aún tienen a pueblo sometido a una situación deplorable. El proyecto «Boquerón Avanza y Em-prende» resultó ser una falacia. Hoy, el Plan de Manejo Social (PMS) impuesto por las minas avanza lentamente y, con el cierre de la mina Calenturitas, los pocos hombres del pueblo que trabajaban allí se quedaron sin empleo.

Sin embargo, Boquerón no se rinde. Ha surgido una nueva generación de líderes que comprenden cómo y por qué defender su territorio, que están determinados a resistir. Estos jóvenes tienen la esperanza de ayudar a su comunidad a superar estos desafíos.

Hoy en día, visitar Boquerón es presenciar una determinación inquebrantable. Los habitantes afirman que harán lo que sea necesario por Boquerón y que no tienen intención de abandonar su hogar.

A mi pueblo le escribo

Por: Yair Barón, líder social de Boquerón

Hoy, saco una hoja en blanco y también un lapicero,

porque quiero escribirle a mi hermoso pueblo,

donde vivo y amo con todo el corazón,

y no puede ser otro que tú, mi Boquerón.

Gracias por lo que me has brindado, mi pueblo,

nacer y crecer en ti, es todo un privilegio,

todo lo confirmo al verme en un espejo,

en ti quiero seguir viviendo hasta morir de viejo.

Pero, pueblo, escucho tu llanto,

tantas cosas bonitas de ti aprendí,

que escuchar «reubicación» me causa espanto,

porque sé que no es nada bueno,

como tantos recuerdos que de ti conservo.

Las empresas mineras y el Gobierno se han dispuesto a «matarte»,

¡vaya objetivo! A su paso, acaban con ancianos, adultos, jóvenes y niños,

sin recibir ningún castigo,

Boquerón, tarde que temprano te van a acabar,

pero, déjame decirte algo: a tu gente la matan antes sin disparar.

Cuando eso pase, no quisiera estar aquí

quiero huir...

pero mi mente se empeña a recordar, cuando me bañaba en maraca, Tucuy y también pajuil,

entonces, pienso, reflexiono y digo: de aquí no me quiero ir.

Tus habitantes, tristes, se encuentran,

ya no se escucha: vamos a jugar, pescar o a sembrar,
ahora la palabra más sonada es... nos van a reubicar,
y no es que importancia se le quiera dar,
sino que ya no hay dónde pescar ni sembrar.
Cuántas costumbres conservas, mi pueblo,
cuántos sueños, cuántas historias de amor,
que ignorantes asesinos piensan con monedas darle valor.
Asesinos autorizados por el Estado
Con antecedentes y sucesos
Acaban con pueblos dignos
Violando sus derechos.
Plan Bonito, pueblo hermano,
destruido ya estás,
quedarás en el pasado,
tus exhabitantes ni allí pueden parar,
pues vigilantes, con armas en las manos,
están dispuestos a disparar.

Asesinos que destruyen vidas por carbón
matan y matan si ninguna compasión
acabando con lo más bonito
que cada persona tiene en su corazón.
No existe tinta en mi lapicero, ni hoja en blanco en mi cuaderno
para escribir todo lo que quiero decir
y es solo una excusa porque todo esto me hace daño
pero, al recordar tus calles que es un cascajal
que las engalanan tus casas de barro
la canchita donde a pies descalzos jugamos micro
cuando arriábamos agua en burro de los pozos subterráneos
también el colegio donde me gradué de quinto
y a tu gente que cada vez te hace sentir más bonito
entonces, tomo valor, paro de llorar y vuelvo a escribir
y me digo a mí mismo: Yair, esto también hace parte de ti.

5 de abril de 2015

Capítulo 14. Los cierres de las minas y los sindicatos

Germán Aranzalez me relata que, dentro de los últimos treinta años, la actividad principal o predominante de fuente de empleo formal en el corredor minero ha sido la extracción de carbón térmico. Las empresas más representativas en el sector son Drummond LTD, Grupo Prodeco y CNR. Para el año 2019, estas empresas generaban alrededor de 18.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos según cifras reportadas en sus informes de sostenibilidad.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, la crisis laboral no se hizo esperar en el sector minero energético, y aunque dicha actividad económica tenía autorización por parte del Gobierno nacional para continuar operando, la parálisis de las minas Calenturitas y La Jagua, del Grupo Prodeco, ocasionó pérdidas significativas de empleos indirectos entre marzo y abril del 2020. De los 18.000 empleos existentes, el Grupo Prodeco generaba 7.498, distribuidos en 2.494 trabajadores directos y 5.004 a través de empresas contratistas (información que puede consultarse en <https://www.drummondltd.com/> y <https://www.grupoprodeco.com.co/es/>).

De las quince organizaciones sindicales que existen en el gremio del carbón en las diferentes empresas mineras en el departamento del Cesar, dos son las más representativas: Sintracarbón y Sintramienergética. Tuve la oportunidad de dialogar con varios líderes de dichas organizaciones para que nos ilustraran, desde su experiencia, cómo se ha vivido este proceso de cese de operaciones mineras.

Germán Aranzales Uribe, presidente actual de Sintracarbón, seccional La Jagua, nos contó que representan a los trabajadores sindicalizados de C. I. Prodeco en la mina Calenturitas. Antes de la llegada

de la pandemia y el posterior cierre de minas, tenían 494 afiliados a su organización, pero hoy la realidad es totalmente diferente. El líder sindical expresó que, desde marzo del 2020, la empresa C. I. Prodeco suspendió sus operaciones por varios meses argumentando razones técnicas y económicas que en ningún momento fueron avaladas por la autoridad minera. Posteriormente, la compañía presentó la renuncia a sus títulos mineros en febrero 2021, que fue aceptada por la Agencia Nacional de Minería en septiembre del mismo año. Dados esos acontecimientos, los trabajadores recibieron diversas acciones sistemáticas de desvinculación laboral del personal que prestaba sus servicios directos a la empresa C. I. Prodeco, por medio de planes de retiros voluntarios (PRV) coaccionados, despidos sin justa causa, entre otros.

Dijo el líder sindical que la crisis de desempleo en el sector por el cierre minero generó la pérdida de 6.500 puestos de trabajo, lo cual impactó a unas 20.000 familias que dependían de esta actividad económica por las relaciones comerciales derivadas: vendedores de comida, servicios de limpieza de uniformes, arrendamientos, etcétera. De acuerdo con la base de datos de la organización sindical, para abril de 2023, Prodeco reportó que su planta de empleados era de 673 colaboradores, de los cuales 275 son directos y 398 a través de contratistas. Estos trabajadores realizan labores de cuidado, mantenimiento y comercialización de carbón de terceros.

Los líderes sindicales de Sintracarbón y Sintramienergética sostienen que el problema laboral se agudizó por los mecanismos de desvinculación que aplicó el Grupo Prodeco, puesto que solo indemnizó económicamente, pero no preparó, capacitó o entrenó a los extrabajadores en nuevos procesos y proyectos de reconversión laboral y productiva. Muy a pesar de la atención que el nuevo Gobierno nacional le ha dado al territorio, se requieren con urgencia verdaderas acciones encaminadas a una transición energética justa, con apoyo local, departamental, nacional e internacional.

Las organizaciones sindicales presentes en la región han estado activas en la defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores en la industria minera. Mientras tanto, Prodeco, subsidiaria

de Glencore, ha proclamado que cumple con los estándares de derechos humanos, responsabilidad social, protección ambiental y condiciones laborales en Colombia.

Es importante que el mundo sepa que esta empresa ha causado tanto daño que parece haber permeado a todas las instituciones gubernamentales responsables de supervisarla. Lo afirmo basándome en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: Auto 2091 del 28 de mayo del 2015, Expediente 2622.

Figura 10. Corregimiento de Boquerón en la actualidad



Fuente: anónimo.

Para finalizar este tema tan espinoso, bastará decir que, en estos últimos cuatro años, Prodeco creó una figura distractora, la mal llamada entidad Diálogos Improbables, que no es otra cosa que utilizar a algunos líderes incautos del territorio —más bien, engañados por Prodeco— para, a través de una universidad privada de Valledupar, planificar el futuro del territorio después de la minería. Lo comprobamos en una reunión realizada en la Casa de la Juventud en el año 2022, cuando su directora reconoció que eran financiados por Prodeco para seguir engañando a las comunidades. Hoy, lo único que dejó ese plan para el futuro fue desolación, desempleo, hambre y destrucción.

Capítulo 15. Las mesas de trabajo, sin apoyo

Es triste comprobar cómo esas resoluciones emanadas desde Bogotá fueron lesivas para el territorio, pero más aún que un ente de control haya lanzado una alerta que nunca fue tomada en cuenta por el Gobierno.

Boquerón no se rinde. Aunque hayan sido violentados en toda la extensión de la palabra, sus habitantes seguirán en pie por sus familias, por la VIDA, a pesar de que les fue arrebatada por una minería despiadada que, mientras enriquecía a los de afuera, dejó a sus moradores más pobres que antes de la llegada de las empresas responsables.

Quiero aprovechar este espacio para expresar mi amor por La Jagua de Ibirico, al que llegué el 27 de septiembre de 1985, donde he gestado cinco hijos y formé una familia que me enorgullece y que ha soportado todo. Donde tengo unos amigos luchadores, incansables, que con y sin defectos luchan por defender el territorio, algunos ya fallecidos, como es el caso de Miguel Rivero Camacho (Guarumito), a quien entrevisté. Lo visitamos hace un par de meses, nos reunimos con Adanies Quintero. Lo vimos enfermo, abandonado a su suerte después de haberle servido a La Jagua tantos años.

Duele tener que contar estas cosas. Quizás yo partiré tranquilo a los brazos de Dios. He sufrido tantas amenazas, he sido vetado por las empresas por decirles la verdad, no fui entendido por las comunidades muchas veces. Empero, tengo la convicción intacta y mi conciencia en paz. No dediqué un solo instante a algo que no fuera el favorecimiento de La Jagua de Ibirico.

Recuerdo que, en el año 2013, llegó al territorio la profesora Andrea Cardoso, que contactó a Eusebio García Guevara, otro defensor incansable de La Jagua. Más adelante, Eusebio nos la presentó. Vi

que su imagen era agradable. Ella quería conocer todas las problemáticas de La Jagua. La acompañaba Carlos Pardo, un antropólogo. Solicitaron charlar con nosotros para conocer sobre los efectos de la minería en el centro del departamento del Cesar. No les presté mucha atención al inicio, ya que en esa época vivía en el corregimiento de La Palmita, donde tenía mi sustento.

Las mesas de trabajo habían desarrollado una labor social sin precedentes: el municipio caminaba hacia otro horizonte. Después de seis años, la economía era desbordante y próspera, pues el municipio tenía muchas obras y trabajadores; además, la mayoría de los empleados mineros, aunque no fueran del área de influencia, algo dejaban. Existían muchas empresas de tercerización que tributaban y, mal o bien, esos ingresos iban a las arcas del municipio. Eso permitió que pasáramos a cuarta categoría como municipio. Prácticamente, La Jagua vivía de las rentas del carbón. Es una paradoja el haber logrado posicionarlo en 2011 financieramente por los ingresos de recursos de regalías y los tributos que dejaban las empresas contratistas de las minas. Todo esto mostraba, sin duda alguna, que el pueblo seguía prosperando y estaba tranquilo, existía un ambiente pacífico, sin grupos armados, solo ocurrían algunos casos de inseguridad aislados.

La protesta social había llamado la atención de muchas ONG que, desde otras partes del país, incluso del mundo, ya iniciaban sus investigaciones con respecto a la explotación de carbón y sus efectos; pero, más que eso, querían saber cómo una comunidad organizada logró parar la producción de carbón tres días y obligó a los gobiernos a poner una mirada sobre lo que más adelante sería una catástrofe para el pueblo. En esas andanzas conocimos a Carlos y Andrea, quienes investigaban para hacer sus tesis de grado. Allí se consolida una amistad que se mantiene vigente.

Asumo el cargo de presidente de la junta de acción comunal de mi barrio en el 2016. Esa dignidad me lleva a ser más visible, me llegaban toda clase de invitaciones y muchas las empresas mineras nos citaban para hablarnos de boletines ambientales de sus actividades

sociales y presentarnos algunas capacitaciones que eran dirigidas por fundaciones de fuera del municipio. Los compañeros presidentes, en cabeza de Asojuntas, notaron que los compañeros del casco urbano y rural casi no eran tenidos en cuenta por las minas. Elegimos a una mujer como presidenta, quien llevó a cabo la tarea de legalización de todas las JAC del municipio. Las juntas obtuvieron un estatus importante gracias a Nuris Terán Quiñones y su equipo de colaboradores.

Las visitas de Carlos y la doctora Andrea las coordinaba Eusebio, quien era coordinador de las mesas de trabajo. Recuerdo haberlos visto en el sindicato Sintramenergética. La relación entre los sindicatos y las comunidades era pésima porque ellos son independientes y estaban poco conectados con los líderes comunales y la ciudadanía en general.

Las mesas, para año 2013, tenían una pequeña oficina en la antigua Casa de la Cultura, pero no era funcional. Los miembros de las mesas se centraban en sus ocupaciones laborales. Solo Eusebio recibía las visitas de muchas entidades. Era una situación muy difícil para él, ya que no recibía apoyo de nadie. Se sentía cansado de llegar a la Alcaldía a diario a visibilizar las mesas y era estéril su insistencia. En ese afán de mantener viva la veeduría de las mesas, nos llamaba con frecuencia. Llegué varias veces a repartir cartas de invitación a las reuniones para darle vida a las mesas, pero fue imposible; todos habíamos partido a nuestras actividades laborales. En las mesas no se ganaba absolutamente nada, era una actividad *ad honorem*.

Mas sin embargo, Eusebio estuvo allí más de seis años y mantuvo las mesas vivas con su propio esfuerzo. En 2016, se dio una protesta por parte de un sector de jóvenes y desempleados que cerraron los parqueaderos de donde salían los buses que llevaban a los empleados a las minas. Eusebio apoyó esa protesta y se paró en la entrada del parqueadero. Por esto, la policía lo capturó y fue judicializado. Varios días estuvo detenido por defender a su pueblo de la multinacional Glencore. Días más tarde, nos enteramos de que, a través de su gerente en La Jagua, la empresa lo había denunciado por rebelión y fue trasladado a Chiriguaná sin que nadie se condoliera de él, solo su familia logró pagar un abogado para traerlo de nuevo a casa.

A partir de ese momento, decido iniciar una investigación a profundidad sobre qué iba a pasar con el final de la explotación de carbón en la mina PLJ como se conocía en ese momento. Carlos y a la doctora Andrea venían haciendo algunos trabajos de campo con Félix Jiménez y Hernando Fonseca, quienes habían decidido apoyar a Eusebio para que las mesas de trabajo no desaparecieran. A ellos, nuestro reconocimiento desde las bases sociales.

La investigación buscaba darles vida a las mesas, ya que habían jugado el papel social vital en el municipio desde la protesta de 2007. Pero, más aún, se quería saber cómo sería la salida de las empresas del territorio, pues ya se escuchaba que la mina PLJ saldría del territorio en 2035. Recuerdo muy bien que fui al Concejo municipal a pedirles que nos incluyeran, en el presupuesto, un pequeño rubro para el funcionamiento de la oficina de las mesas, aunque no fuimos escuchados. Me hacía algunas preguntas; por ejemplo, ¿por qué llegan tantas entidades extranjeras al territorio? Más adelante se los contaré con pelos y señales.

Inicialmente, solicitamos una visita a las minas para saber cómo iban los procesos de reforestación y la recuperación de los ríos desviados, y si se cumplía con el plan de manejo ambiental, pero no nos dieron el permiso para entrar a las minas. La mina PLJ había cambiado de gerente. Eso prendió las alarmas y decidimos reactivar las mesas. Nosotros tomamos como fecha conmemorativa el día 10 de febrero para recordar la gesta hecha por todo el pueblo en 2007. Aunque no nos sentimos respaldados por el Gobierno local, el 10 de febrero del 2019 logramos reunirnos todos nuevamente en la finca de Reginaldo Peralta, quien era el coordinador de la Mesa de Agricultura.

Por la trascendencia del evento, se transcribe a continuación el acta de la reunión extraordinaria.

ACTA N.º 001

REUNIÓN EXTRAORDINARIA MESAS DE TRABAJO

LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR

10 de febrero de 2019

Siendo las 10:15 a. m. del domingo 10 de febrero de 2019, se da inicio de la reunión extraordinaria de los miembros fundadores de las Mesas de Trabajo, en la finca del señor Reginaldo Peralta «Vereda la Estrella», del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.

A continuación, se desarrolla el siguiente orden del día:

1. Oración a Dios
2. Llamado a lista y verificación de *quorum*
3. Palabras Coordinador General (Eusebio García)
4. Intervención coordinadores de las diferentes sectoriales de las Mesas de Trabajo
5. Propositiones y varios
6. Convocatoria próxima reunión

Se inicia la oración a cargo del señor Adalberto Muñoz, dando gracias a Dios por el reencuentro de los miembros fundadores de la creación de las Mesas de Trabajo. Dicha fecha a recordar fue el 10 de febrero del 2007. Además, se coloca en manos de Dios la reactivación de las Mesas de Trabajo en este nuevo periodo.

Se toma a lista para verificación de *quorum* y se legaliza el inicio de la Reunión con la aprobación de los presentes, con las siguientes especificaciones:

El despertar de La Jagua: el paro del 10 de febrero

Ítem	Nombres y apellidos	Presente	Ausente	Excusa/ observación
1	Adalberto Muñoz	X		
2	Adanies Quintero	X		
3	Alba Amador Orozco		X	
4	Alexander Salazar	X		
5	Álvaro Castro	X		
6	Ana Mary Peralta		X	
7	Edilmer Muñoz	X		
8	Efraín Arriaga		X	
9	Eligio Ortiz	X		
10	Elkin Benjumea		X	
11	Enides Pérez	X		
12	Eusebio García	X		
13	Filia Salazar	X		
14	German Albor	X		
15	Jairo Salazar	X		
16	Jorge López	X		
17	José Jiménez		X	
18	Luis Montaña Castellanos		X	
19	Miguel Rivero	X		
20	Misael Liz Quintero	X		
21	Pedro Diaz Campo		X	
22	Raúl Romero	X		
23	Reginaldo Peralta	X		

Ítem	Nombres y apellidos	Presente	Ausente	Excusa/ observación
24	Silvester Hernández		X	Cita médica en Barranquilla
25	Yolanda Rivera		X	

Siguiendo el orden del día, las palabras del coordinador general de las Mesas de Trabajo Eusebio García. Expone breve historia del conmemorativo día del 10 de febrero de 2007, y hoy, pasados doce (12) años, analizó los cambios, avances y compromisos sin cumplir. Entrega verbalmente las gestiones adelantadas durante su coordinación en los últimos ocho (8) años, donde también exalta la labor realizada por el secretario técnico Edilmer Muñoz, como un gran luchador y coequipero durante su proceso.

Eusebio García manifiesta que siempre ha sido insistente en los espacios en nombre de las Mesas de Trabajo, las reuniones que realizó con diferentes organismos públicos y privados, reiterando la falta de apoyo tanto de los mismos miembros de las diferentes sectoriales como de los entes comprometidos. Refiere su compromiso en adelantar y gestionar solo por el bienestar y desarrollo de las comunidades.

Nos actualiza sobre su situación judicial, por la cual fue retenido de su libertad. Fue acusado por haber participado como organismo de enlace y representante de las Mesas de Trabajo en protesta y apoyo de una comunidad de desempleados pertenecientes al Municipio, donde exigían sus derechos a ser vinculados laboralmente en las empresas que explotan en la región de manera pacífica. Por lo que resalta no haber recibido el apoyo de los mismos miembros de las sectoriales de las mesas de trabajo.

Finalmente, entrega la Coordinación General de manera informal (verbalmente), haciendo breve resumen en lo ocurrido en su ausencia, es decir, cuando le privaron de su libertad; donde las oficinas de las Mesas de Trabajo se encontraban ubicadas en un espacio

de la Casa de la Cultura «Vieja» y relata, que regreso a dicha oficina y no encontró los equipos de cómputo, archivos, documentación, etc. Lo cual no le dan respuestas positivas de lo existente. Agradece a todos por la convocatoria y solicita como lo dice los estatutos, volver a su Sectorial la Mesa de Ambiente.

A continuación, ítem del orden del día n.º 4: las intervenciones de las diferentes sectoriales.

—Álvaro Castro Meriño, coordinador Mesa Salud:

Manifiesta un reconocimiento público a todos los miembros de las Mesas de Trabajo, en especial y específicamente a los que permanecieron activos, exaltando la labor invaluable y gestión incansable en la organización.

Hace un análisis de los logros que las Mesas de Trabajo han adelantado durante los doce (12) años de servicio a la comunidad, reconociendo así mismo al coordinador general Eusebio García como ejemplo de persistencia y lucha por sostener las mismas.

—Alexander Salazar Ávila, coordinador Mesa Laboral, SENA:

Relata que hay que ser sustancial y manifiesta su posición como espectador en lo personal, reconociendo su distanciamiento de las Mesas de Trabajo por actividades propias de su sostenimiento. Expresa que en la vida todo tiene su importancia desde los distintos puntos de vista; al igual, felicita a los miembros por las gestiones realizadas dentro de los parámetros de la organización.

Afirma que La Jagua tuvo, en su tiempo, desarrollo con el apoyo de las Mesas de Trabajo, generando progreso y aportes al beneficio de la comunidad. Sugiere mantener buenas relaciones con los dirigentes de los entes y entidades de la región y que se deben dejar en el baúl de los recuerdos todas las diferencias. Esto con el fin de recuperar el apoyo y seguir siendo reconocidos como Mesas de Trabajo y gestionar por medio de ellas beneficios para la comunidad. Manifiesta también que se debe tener claro cuáles son las verdaderas necesidades, en especial los alcaldes de turno, diferenciando lo que quiere la gente o que realmente necesita, ya que estos creen saber sus

necesidades, ejecutando proyectos que no minimizan la problemática de la comunidad. Insiste en que los alcaldes deben ver las Mesas de Trabajo como unos aliados y amigos. Hace una pregunta a Miguel Rivero sobre su vida gestionando beneficio a su comunidad y lo resalta como un verdadero político en el municipio.

También pone en cuestión la problemática de La Jagua de Ibirico, por la falta del nivel de ingreso per cápita para ser autónomo en sus gastos.

—Misael Liz, tercer interviniente:

Agradece la invitación a la reunión e informa que en este periodo no acompañará en gestiones de las Mesas de Trabajo por encontrarse impedido frente a sus aspiraciones como alcalde del Municipio, pero relata la preocupación de reactivar las actividades de las Mesas de Trabajo y manifiesta su preocupación y observaciones frente a los procesos de los pozos profundos de Drummond.

—Germán Albor: (q. e. p. d.):

Se refiere a su liderazgo en la parte social y su incansable labor, donde ha sido tentado, pero se ha mantenido en sus ideales y compromiso con la comunidad. Manifiesta que las mesas no tienen que pedirle nada a las empresas para tener el derecho de exigir, ya que son las partes por las que más somos afectados.

—Adalberto Muñoz, coordinador de Agua y Servicios Públicos:

Inicia dando gracias a Dios por la oportunidad de encontrarse en la reunión y expresa su inconformidad en no compartir con algunos conceptos como sacar beneficios de la problemática que se vive en el interior de las Mesas. Manifiesta no estar en desacuerdo que ayuden, pero que debe hacerse de manera colectiva y no personal. También relata el abandono y el aislamiento que han tenido las administraciones de turno con las Mesas de Trabajo, ya que estas han sido voceras en distintos procesos. Afirma que no hay que tener recursos para su funcionamiento a un problema, situación, etcétera, y existen distintas alternativas. Con respecto a Drummond, hay que exigirles por sus responsabilidades empresariales, compensación al daño y deterioro ambiental que ha hecho en el territorio.

Manifiesta que la crisis fundamental de La Jagua de Ibirico es que no tiene capital de trabajo; tiene que haber ingreso per cápita y buscar el desarrollo para la comunidad. Se toca un ejemplo sobre el tema del ingreso del anterior alcalde Didier Lobo, donde su ingreso fue de muchos millones de pesos y la actual alcaldesa un ingreso de más de 400 mil millones de pesos, certificando así que el municipio no es pobre, solo son intereses de manejos.

Se refiere al tema con Prodeco: va a recompensar unas tierras para ser entregadas a los campesinos y las Mesas de Trabajo no fueron informadas sobre el tema, ya que han perdido espacios importantes. Recomienda a recuperar esos espacios, tomando nuevamente las Mesas de Trabajo un papel estratégico e incluso tomando de aliado al actual senador, propiamente de la región de La Jagua de Ibirico. Solicita que se convoquen nuevas reuniones con las Mesas de Trabajo y pide que se realice la elección de una nueva coordinación.

Se realizó la elección por votación nominal. Fui elegido coordinador general; Reginaldo Peralta fue elegido subcoordinador.

Ya tomada la dirección de las mesas, solicitamos a cada sectorial un informe actual de cómo se encontraba la entidad para dar los pasos siguientes. Los problemas más evidentes seguían siendo el laboral, el ambiental y el social.

Siendo las 6:00 pm de la fecha antes mencionada y tomando posición de los cargos con las recomendaciones recibidas se da por finalizada la asamblea. Se recomendó al nuevo coordinador oficial a todas las entidades municipales, departamentales y nacionales.

Una semana después, informamos a la alcaldesa de turno, pero pasaron cuatro años y no fuimos escuchados. Llamé a los miembros de las Mesas y les conté que a partir del año 2018 había iniciado una investigación porque los sindicatos de La Jagua decían que la mina se iba del territorio.

Establecimos unas líneas profundas que nos permitieran saber con exactitud cómo sería esa ida de Prodeco. Solicité la licencia ambiental. Al leerla noté que unas resoluciones de ANLA no estaban siendo

socializadas con las comunidades a pesar de que era un documento público. Y con los hallazgos, encontrados por la Contraloría General de la Nación, había que prender las alarmas.

Ya para esas fechas inició el despido masivo de trabajadores y muchas empresas de tercerización empezaron a irse de La Jagua. Para enero de 2020, se conoce, por fuente de trabajadores de la mina, la salida de Prodeco del territorio. Fueron despidiendo trabajadores sin justa causa.

Se veía mucho movimiento raro por Boquerón. Me comentaron que una ONG, Tierra Digna, había hecho algunas investigaciones, pero que se habían ido del territorio. La mina cerró la oficina de atención a las comunidades, algo estaba pasando. Fui contactado por Tierra Digna. Manifestaban su gran preocupación por el cierre de la mina. Recomendaron leer bien todas las resoluciones emitidas por el Gobierno los últimos diez años después del paro.

Al no tenerlas, buscamos las resoluciones y salimos a visitar las minas. Observamos pocos movimientos. En las dos minas había algo extraño, porque seguía habiendo producción de carbón en el centro de acopio, información dada por los trabajadores. Para febrero de 2020, fui invitado por el señor alcalde de La Jagua a una reunión a su despacho. La información que nos da es que la mina lo notificaba de su partida en 2032. Eso nos tranquilizó un poco porque dijimos que había doce años más de explotación.

Pero había algo que no estaba bien. Seguían los despidos masivos, muchos trabajadores salían a diario de la empresa.

Seguí averiguando un poco inquieto. Nos hacen llegar la licencia y el plan de manejo de la mina La Jagua. Al escudriñarlo, noté algo sospechoso. Cité a mis compañeros de las mesas de trabajo y al unísono prendimos las alarmas. Prodeco fraguaba algo de espalda a las comunidades. Vimos que los empleados que ostentaban cargos de relaciones con las comunidades ya no estaban laborando.

Fue la masacre laboral más grande del centro del Cesar. Pasó solo un mes para que se declarara la emergencia social por el COVID-19.

Se rompe la clandestinidad que tenía Prodeco. Al pasar los días, cierra por pandemia y anuncia que habían entregado los títulos al ANLA. Me contacta la ONG Tierra Digna y me pregunta:

—¿Leíste los documentos?

—Sí —le contesté—. Pero no tengo el que presentaron para irse.

—Ya sabemos —me dice la abogada Andrea Torres.

—Dígame, ¿por qué se va la mina?

—Por tres causales que no son muy creíbles para nosotros como abogados.

—¿Cuáles son?

—Porque la tonelada de carbón está a 38 dólares y el negocio ya no es rentable. La otra es porque el Consejo de Estado falló una tutela en favor de las tribus yukpas, en donde son reconocidos como dueños de territorio ancestral. La tercera, por el COVID-19; manifiestan que los sindicatos están molestando mucho, ya que la pandemia se ha extendido. Llegaron los primeros casos.

—¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?

—Hay que averiguar porque, la verdad, no lo sabemos —respondió la abogada.

No pasó un mes cuando se anuncia que se cierra la mina por pandemia. Prodeco dice que no va a exponer a los trabajadores para contaminarlos y que los mandan a casa por el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), mientras pasa la pandemia.

Comienza la desestabilización del municipio. Llega el primer positivo de COVID-19 al pueblo. El Gobierno declara la cuarentena: todos, a trabajar desde casa. Pero una mañana muy tempranito llama el señor alcalde y nos invita a la mina PLJ en La Jagua a una reunión con la administración y algunos líderes de las mesas de trabajo. ¡Fuimos a reunirnos con el gerente de la mina, quien nos da una sorpresa más! Le pedía al alcalde que le permitiera sacar un carbón que estaba acopiado. Creo que 90.000 toneladas que deberían ir para el puerto en Santa Marta. Los contagios de COVID-19 eran frecuentes. Por su parte, Drummond anunció que no cerraría sus operaciones,

que enviaría los empleados con enfermedades crónicas a casa y que los demás se quedarían internos.

Prodeco sí cerró las dos minas, La Jagua y Calenturita. Pudimos entrar a la mina La Jagua. Fuimos al centro de acopio, y decía el jefe de la mina que era muy peligroso dejar el carbón acopiado porque se podía prender, que necesitaba de la ayuda de las comunidades para sacar ese carbón hacia el puerto.

—¿Por qué la ayuda nuestra, de las comunidades?

—Es posible que bloquen la vía.

—Ah... ok —dijo el alcalde.

El jefe de la mina añadió que el carbón encendido iba a producir emisiones de ceniza para el pueblo y contaminaría el casco urbano. «Sí, pero debo consultar con las comunidades» dijo el alcalde.

El alcalde fue a la emisora comunitaria de La Jagua para anunciar la situación, que, entre otras cosas, fue malinterpretada por las comunidades, ya que el inicio de la pandemia fue un factor a favor de la mina para su salida del territorio.

En la lectura del plan de manejo ambiental, descubro que la mina debía haber iniciado su plan de cierre, desmantelamiento y abandono en 2016. Consulté a la alcaldesa anterior. Me dijo que la empresa no le informó esa situación, que no recordaba eso.

Según Sintraminergética La Jagua y Sintracarbón La Jagua, cada semana de pandemia que pasaba, Prodeco despedía trabajadores. Los llamaba para que se acogieran a un nefasto plan de retiro voluntario. A los sindicatos los mandaba a casa. Por el artículo 140 del CST, todo trabajador era presionado para firmar los acuerdos. Llegaban correos a sus cuentas personales ofreciéndoles sumas de dinero, unas altas, y otras que realmente no correspondían a su verdadera liquidación.

Reflexiones finales

Pero ¿realmente que era un plan de cierre para las comunidades? Era, nada más y nada menos, el cumplimiento de la licencia ambiental en todos sus componentes y las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental para que la mina saliera de acuerdo con las normas vigentes del Gobierno colombiano. Estas normas tenían más de veinticinco años sin modificaciones, favoreciendo a la multinacional.

A través de una llamada, solicité un concepto a la abogada, quien me dice:

—La única manera para que puedas detener esta salida de Prodeco es accionando una tutela en defensa del territorio. Además de eso, el derecho a la información que siempre les ha sido negada.

—¿Qué debemos hacer para enfrentar a una empresa con tanto poder? Sería «pelea de tigre con burro amarrado».

—¡Tocar no es entrar! La tutela no solo sería de La Jagua, sino también de los sindicatos, las asambleas campesinas, La Loma, Cesar, el puerto en Santa Marta y todos los pueblos que se sientan afectados por la salida de Prodeco del territorio.

Yo inicié informándoles a los presidentes de JAC, líderes y comerciantes. Fui al Concejo municipal, a la sociedad civil, pero nadie me escuchó, parecíamos dormidos.

—¿Qué debo hacer para accionar la tutela?

La abogada recomendó:

—Debes pertenecer a una organización social que te autorice, que te respalde. Debes darnos poder amplio y suficiente para iniciar este proceso y recoger unas firmas de respaldo. Te haremos un documento, se los presentarás para que lo lean, les tomas las firmas. Además de eso, la organización social que te respalde debe darte soporte o manifestar

que está vigente y preséntame un documento que certifique que perteneces a ella.

Por ser delegado de la JAC de mi barrio, solicité el documento y me fue entregado. Ya firmado el poder, me tocó ir a buscar unas firmas de respaldo de las comunidades. Recuerdo que eran 40 firmas. Salí a pie por las calles, explicando lo que íbamos a hacer, y muy pocas personas nos escucharon, estaban como dormidas; además, ya la pandemia estaba cobrando víctimas.

Al final, solo 20 ciudadanos me firmaron y eso me bastó para dar el poder. Un año después del cierre, los abogados interpusieron una acción de tutela masiva en el Tribunal de Cundinamarca, que fue admitida, pero ya para esa época el nuevo presidente elegido se había posesionado y, por fuentes de los abogados, ya estaba enterado de que las comunidades de La Jagua de Ibirico, los corregimientos de La Loma y Boquerón, Becerril, las asambleas campesinas, los yukpas y el corregimiento de Cordobita, en Ciénaga, habíamos hecho un «tutelatón» en defensa del territorio. Nos imaginamos que al Consejo de Ministros había llegado tanto la tutela para el impedimento de la ronda minera² como la tutela de las comunidades.

Enterado el nuevo gobierno de la situación, el Ministerio de Minas del gobierno Duque organizó varias rondas mineras, pues pretendía entregar la misma licencia a otras empresas para la extracción de 50 millones de toneladas de carbón que existen en la mina La Jagua; pero todas fallaron. Con la otra tutela, el abogado buscó no entregar la ronda minera para la extracción del carbón faltante hasta no revisar el total cumplimiento de la licencia de la empresa Prodeco. La comunidad ya

2. EXP. RADICACIÓN: 250002341000-2022-00842-00. MEDIO DE CONTROL: protección de los derechos e intereses colectivos. Accionante: Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Accionado: Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería (ANM), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ANLA, SOCIEDADES C. I. PRODECO S. A. y CARBONES DE LA JAGUA S. A. Temas: derechos colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, goce de un ambiente sano, existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible conservación, restauración o sustitución. Asunto: estudio de solicitud de medidas cautelares de urgencia.

había interpuesto dos acciones jurídicas: una en contra de las entidades del Estado y otra en contra de Prodeco.

Manipulación de Prodeco

La multinacional, al darse cuenta de que su propósito de abandonar La Jagua estaba siendo afectado, inició una campaña de desinformación al pueblo a través de llamadas telefónicas a los presidentes de juntas, líderes y funcionarios de la administración municipal. Decían que la mina se había cerrado por culpa de la tutela y no se podía abrir. Fue tanta la presión que ejerció Prodeco que, cuando salía yo a las calles, se me acercaban los ciudadanos y me decían: «Hey, Álvaro, están diciendo que por culpa tuya cerraron la mina Prodeco». Esto atentó contra mi seguridad. Días más tarde, el Tribunal de Cundinamarca trasladó la acción de tutela nuestra al Tribunal Administrativo de Valledupar, quien falló a nuestro favor y obligó, en primera instancia, a que se cumpliera con lo solicitado por los accionantes.

Prodeco emprende una campaña de desprestigio hacia los accionantes sin saber que ya teníamos en nuestro poder la resolución que expidió ANLA en el Auto n.º 09379 del 5 de noviembre de 2021. Luego, al negarse a cumplir con el plan de cierre, expide una resolución final, el Auto n.º 11384 del 29 de diciembre de 2021. Prodeco hizo caso omiso a las órdenes del Gobierno. Estos dos documentos nunca fueron socializados, ni siquiera a los alcaldes, quienes hubieran podido actuar con responsabilidad y no se hubieran dejado engañar por esta empresa que, a la fecha, ha impugnado las decisiones judiciales mientras dilata los procesos.

Las luchas continúan. Se espera que las comunidades entiendan que la minería genera que los pueblos mineros terminen en la pobreza por la destrucción de sus economías. La Jagua, por ejemplo, descendió a sexta categoría. Más de doscientas empresas subcontratistas de Prodeco salieron del pueblo. Los trabajadores fueron despedidos sin recibir orientaciones sobre cómo poder defenderse con sus

malas liquidaciones. Según datos de la Asociación de Jóvenes de La Jagua, para el año 2021, el 62 % de la población estaba desempleada.

Actualmente, se habla de transición energética justa. Estoy adelantado una investigación con respecto a este tema en la COP 24. ¿Cómo afectaría o beneficiaría a nuestro pueblo?, ¿Qué piensan los actores políticos?, ¿Qué es el hidrógeno como nueva fuente de energía?, ¿Qué son parques eólicos?, ¿Qué son parques solares?, ¿Cómo y cuándo se hará reconversión productiva y reconversión laboral para salir de la minería?, ¿Qué posición ha tenido el Gobierno departamental y su dirigencia política?, ¿Cuáles han sido los efectos negativos por el cierre de la mina?, ¿Cómo está Prodeco en el tema de derechos humanos?, ¿Cuáles son los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en la compra y venta de carbón?, ¿Qué nuevas fuentes de energía se producen al dejar de explotar carbón térmico?, ¿Qué modelos de planes de cierre han dado resultados en el mundo?, ¿Cómo quedarán los territorios hacia el año 2035, cuando se proyecta terminar con la extracción de carbón térmico?

Trataré de ahondar en estas preguntas en la segunda parte de este maravilloso texto, que pondrá al descubierto cómo el norte global saqueó la costa Caribe. Se sabe que los gases de efecto invernadero se producen en la extracción de carbón térmico, que se necesitan otras fuentes de energía, pero sacan carbón de nuestros pueblos sin importarles nuestras vidas, ya que las reservas son intocables en sus países. Asimismo, haré un análisis objetivo sobre cuál fue el rol de la academia y las ONG al llegar al territorio.

Los líderes sociales seguiremos dando la lucha por defender nuestro territorio, aunque nos cueste la vida.

Finalmente, mi amada Jagua de Ibirico es como la tierra en la que fluye leche y miel. Dios la premió con una riqueza incalculable que aún le pertenece: gran parte de la serranía del Perijá. Sigue habiendo gente buena, campesinos que siguen soñando con ser la despensa alimentaria del centro del Cesar. Sin embargo, el futuro es incierto con estos 12 años de explotación de carbón que hacen falta.

Nuestros pueblos fueron sometidos por las multinacionales, incluso por gobiernos anteriores, como por ejemplo el de Juan Manuel Santos, que implementó la locomotora minera sin importar que la empresa Glencore tiene una deuda histórica con los pueblos del Caribe, en especial con los del centro del Cesar.

Las comunidades seguiremos resistiendo aun sin el apoyo del Estado. Quedará en la historia de mi amada La Jagua su resistencia, su valor y la premisa de seguir defendiendo a un pueblo que, así violenten sus derechos humanos, como el caso de Boquerón, continuará la lucha hasta la muerte.

Hoy, al finalizar este libro, sacado de las entrañas de un municipio que resiste, deseo que los lectores puedan conocer y entender de buena mano una realidad que todavía está presente y que solo a través de estos medios podemos hacer pública: la resistencia de una comunidad que le dijo «no» a una multinacional que llegó y se fue llena de dólares, pero enemistada con el pueblo.